



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

//hía Blanca, 23 de noviembre del 2023.

AUTOS Y VISTOS:

Se constituye conformando el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, integrado en este caso de manera unipersonal, en los términos previstos en el art. 9 inc. “b” de la ley 27.307, el Señor Juez de Cámara, Dr. Ernesto Sebastián, asistido por la Secretaría, Dra. Paula Pojomovsky, para dictar sentencia, según las previsiones del artículo 32.II. inc. 2º y 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, en la presente causa **FBB 12000018/2011/TO1**, caratulada **“SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACIÓN ILICITA FISCAL DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO”** del registro de este Tribunal Oral, seguida contra: 1) **Juan Suris** argentino, nacido el 29 de enero de 1977 en Bahía Blanca, titular del DNI N° 25.665.276, de estado civil casado, con estudios secundarios completos, de ocupación empresario; con domicilio real en Saavedra 1949 Dto. Las Colonias- Esperanza de la Provincia de Santa Fe, hijo de Eduardo y de Angela Palmira Lambertucci; 2) **Eduardo Suris** argentino, nacido el 23 de noviembre de 1945 en Bahía Blanca, su DNI N° 5.506.099, de estado civil viudo, con estudios secundarios completos, de ocupación comerciante; con domicilio real en Ciudad de Caliz 4080, de esta ciudad, hijo de Marcos y de Haydee Cela; 3) **Nicolás Ibarra Gutierrez**, argentino, nacido el 11 de diciembre de 1980 en Bahía Blanca, titular del DNI N° 27.830.632 de estado civil soltero, con estudios secundarios incompletos, de ocupación empleado de agencia de autos de Maximiliano Blasioli; con domicilio real en Maitén 227, de esta ciudad, hijo de Gustavo Alejandro Ibarra y de Lucrecia Ivon Gutierrez; 4) **Juan Pipkin**, argentino, nacido el 19 de julio de 1989 en Bahía Blanca, DNI N° 36.609.702 de estado civil soltero, con estudios secundarios completos, de ocupación piloto profesional; con domicilio real en 2000 NE 135 SP APT 503, Nor Miami, Florida, EEUU, hijo de Walter y de Rosana Di Meglio; y por último, 5) **Domingo Tomás Goenaga**, argentino, nacido el 17 de octubre de 1971 en Bahía Blanca, de DNI N°

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBF 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

22.325.640, de estado civil divorciado, con estudios universitarios completos, de ocupación actual Contador Público Nacional; con domicilio real en Kennedy 606, hijo de Alfredo Domingo Goenaga (f) y de Silvia Beatriz Prequiu.

Intervienen en este proceso, en representación del Ministerio Público Fiscal, el Sr. Fiscal General Adjunto Subrogante, **Dr. Gabriel González Da Silva**, el Defensor Oficial, **Dr. Gabriel Dario Jarque**, en defensa de **Domingo Tomás Goenaga**; la Defensora Oficial, **Dra. Malvestiti Gisela Lorena** en defensa **Eduardo Suris**; los codefensores particulares **Dra. Jana Pipkin** y **Dr. Facundo Andres Alvarez**, en defensa de **Juan Pipkin**; el **Dr. Leonardo Gomez Talamoni** en defensa de **Nicolás Ibarra Gutierrez**, los señores codefensores particulares, **Dres. Mariano Ramon Bernardez y Adrian Martin Rois** en defensa de **Juan Ignacio Suris**; y por último la Dra. María **Antonela Girotti** en su carácter de representante de **la parte querellante, AFIP**.

I. RESULTANDO:

I.1. La imputación:

Mediante la requisitoria fiscal de elevación a juicio presentada tanto por el Ministerio Público Fiscal como por la parte querellante, AFIP, los imputados **Juan Ignacio Suris, Eduardo Suris, Nicolas Ibarra Gutiérrez, Juan Pipkin, Flavio Rodrigo Carrano¹ y Domingo Tomas Goenaga** fueron requeridos a juicio en orden a su intervención en la conducta típica constitutiva del delito asociación ilícita fiscal, prevista en el artículo 15, inciso c) de la Ley 24.769. En cuanto al grado de participación, mientras que Juan Ignacio Suris, fue sindicado en calidad de jefe y organizador, a los restantes imputados se les atribuyó su conducta en carácter de miembros de la citada asociación.

El Ministerio Público Fiscal solicitó la fijación de una audiencia (f.5189), dado que habría alcanzado diversos acuerdos con las partes involucradas. Es así que con

¹ Se deja constancia que con fecha 31/08/2022 (fs. 5069) se declaró extinguida la acción penal por muerte del imputado Flavio Carrano, disponiéndose, en consecuencia, el sobreseimiento del nombrado por el hecho en función del cual fue indagado (arts. 59, inc. 1 del CP y 336 inc. 1 del CPPN).





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

fecha 27/10/23 (f.5190), se celebró la audiencia petitionada con la presencia de todas las partes intervinientes en este proceso (partes acusadoras -MPF y AFIP- e imputados con sus respectivas defensas), durante la cual expusieron los acuerdos logrados, los cuales reflejan diversa naturaleza.

En la especie, dichos acuerdos consisten, por un lado, en la instauración de un **juicio abreviado** respecto de **Juan Ignacio Suris, Eduardo Suris, Nicolas Ibarra Gutiérrez** y, por otro lado, en la petición del instituto de la **suspensión del juicio a prueba** en relación a **Juan Pipkin y Domingo Tomas Goenaga** (circunstancia que ha sido plasmada en el acta de audiencia de f. 5193/5200) .

Asimismo, los términos y condiciones de los acuerdos expuestos fueron posteriormente presentados por escrito con idéntico tenor a fs.5225/5238; 5240/5252; 5253/5265; 5266/5278; 5279/5290.

A continuación se detallan el contenido de los mismos:

Sobre el Juicio Abreviado

Del análisis de los acuerdos arribados por las partes para abreviar el proceso penal en los términos del art. 431 bis del CPPN, se desprende que el representante del Ministerio Público Fiscal –con el consenso de las defensas y los imputados–, redefinió la calificación de la conducta descartando la subsunción de los hechos en la figura de asociación ilícita fiscal (según lo estipulado en el artículo 15 inciso “c” de la ley 24.769), encuadrándola bajo el tipo penal de asociación ilícita descripto en el art. 210 del Código Penal. Asimismo, las partes mantuvieron conformidad respecto de los grados de asunción al hecho materia de acusación.

Conforme se especifica a continuación, se acordaron las siguientes calificaciones, grado de participación y penas:

1) Juan Ignacio SURIS, coautor por el delito de **asociación ilícita, en su carácter de jefe**, se estima la pena a imponer en base a los principios de culpabilidad y proporcionalidad, en **CINCO AÑOS DE PRISIÓN**, accesorias legales y costas, conforme a los arts. 5, 12, 29, 40, 41, 45 y 210 (primera y





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

segunda oración) del Código Penal y art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación.

En lo que respecta al quantum de la reparación del daño en los términos del art. 29 del Código Penal, dado que se trata de un monto común a todos los imputados y su pago se acordó de forma solidaria, véase el punto I.2.

Por otra parte, las partes manifestaron que, tal como se lo detalló en el marco del acuerdo celebrado con Juan Ignacio Suris y su defensa con fecha 23 de octubre de 2023 en la causa FBB 12000124/2012/TO1 “*Juan Ignacio y Otros s/Infracción Ley 23.737 (art. 5 inc. c)*”, atento a que se están juzgando en forma separada varios hechos, y que los mismos deberán respetar las reglas concursales, y en tanto Juan Ignacio Suris estuvo detenido en el marco de ambas causas -por diferentes periodos de tiempo- **las partes consideran como parte del acuerdo que la eventual pena y detención se ejecute una vez firme la pena única composicional y su cómputo**, ello sin perjuicio de la eventual vista o presentaciones oficiosas de las partes para pronunciarse en relación a la pena única.

2) **Nicolás IBARRA GUTIÉRREZ**, coautor del delito de asociación ilícita, en su carácter de miembro, se estima la pena a imponer en base a los principios de culpabilidad y proporcionalidad, en **TRES AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL**, y costas, conforme a los arts. 5, 26, 29, 40, 41, 45 y 210 del Código Penal y art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación.

Se acuerdan las reglas de conducta previstas en el artículo 27 bis, incisos 1º, 3º y 8º del Código Penal y la reparación del daño. Concretamente, que el encausado:





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

FBB 12000018/2011/TO1

a) Fije residencia y se someta al cuidado de un patronato, o institución similar, presentándose una vez por mes al mismo e informando cualquier cambio de domicilio que realice en el futuro;

b) Se abstenga de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas;

c) Se propone que realice trabajos no remunerados por el término de tres años, en razón de tres horas semanales, en favor de una institución de bien público o privada de igual tenor (en este caso, debiendo resultar acreditable su carácter altruista). También se acuerda la posibilidad de optar por una donación de \$400.000 (pesos cuatrocientos mil) en sustitución de las tareas antes mencionadas, destinadas a la Fundación CIAN (a ser depositados en la siguiente cuenta bancaria de la entidad: Banco Patagonia; Alias: PADRE.TRIGO.COMETA; CBU: 0340053100530007197002; Cuenta: CC \$ 053-530007197-000; CUIT: 30-71123679-8). Dicho monto, de optar por tal alternativa, deberá ser depositado en su totalidad dentro del quinto día en que la eventual sentencia condenatoria quede firme, o bien en hasta diez cuotas consecutivas e ininterrumpidas iguales, a pagarse dentro del quinto día hábil de cada mes a contar desde el momento en que la sentencia condenatoria quede firme.

d) Asimismo, en los términos de los artículos 28 y 29 del Código Penal, se disponga la reparación del daño causado (ver punto I.2), a ser soportada en forma solidaria por todos los imputados de la causa (art. 31 del Código Penal), más allá del acuerdo al que arriben los mismos entre sí a los efectos de su pago.

3) Eduardo SURIS, coautor del delito de asociación ilícita, en su carácter de miembro, estima la pena a imponer en base a los principios de culpabilidad y proporcionalidad, en **TRES AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL**, y costas, conforme a los arts. 5, 26, 29, 40,





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

41, 45 y 210 del Código Penal y art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación.

Se acuerdan las reglas de conducta previstas en el artículo 27 bis, incisos 1º, 3º y 8º del Código Penal y la reparación del daño. Concretamente, que el encausado:

a) Fije residencia y se someta al cuidado de un patronato, o institución similar, presentándose una vez por mes al mismo e informando cualquier cambio de domicilio que realice en el futuro;

b) Se abstenga de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas;

c) Se propone que realice trabajos no remunerados por el término de tres años, en razón de tres horas semanales, en favor de una institución de bien público o privada de igual tenor (en este caso, debiendo resultar acreditable su carácter altruista). También se acuerda la posibilidad de optar por una donación de \$300.000 (pesos trescientos mil) en sustitución de las tareas antes mencionadas, destinadas a la Asociación de Padres de Autistas (APAdA), cuyos datos resultan los siguientes: domicilio del Centro día y Escuela Avenida Laínez 2515 de Bahía Blanca, teléfono 0291-482-1923, representante legal: Virginia Iparraguirre. Datos de la cuenta bancaria de la institución: CBU 0140413901620001560861, Cuenta 15608/6 sucursal 6200 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, APAdA Bahía Blanca, CUIT 30-70791491-9, que se trata de una Asociación Civil sin fines de lucro fundada en Bahía Blanca dedicada a la atención integral de personas con autismo, lo cual se traduce en un beneficio mensurable para la sociedad en su conjunto. Dicho monto, de optar por tal alternativa, deberá ser depositado en su totalidad dentro del quinto día en que la eventual sentencia condenatoria quede firme, o bien en hasta diez cuotas consecutivas e ininterrumpidas iguales, a pagarse dentro del quinto día hábil de cada mes a contar desde el momento en que la sentencia condenatoria quede firme.

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

d) Asimismo, en los términos de los artículos 28 y 29 del Código Penal, se disponga la reparación del daño causado (ver punto I.2), a ser soportada en forma solidaria por todos los imputados de la causa (art. 31 del Código Penal), más allá del acuerdo al que arriben los mismos entre sí a los efectos de su pago.

Sobre la Suspensión de Juicio a Prueba:

En cuanto al instituto de la probation, el representante de la acusación indicó que a partir de la calificación que entiende aplicable (art. 210, CP), y luego de analizar el rol atribuido a cada imputado, consideró que en el caso particular de **Domingo Goenaga y Juan Pikpin**, *“si bien formaron parte de la asociación ilícita y de la operatoria de la misma, su actuar no resultó equivalente al de los restantes integrantes”* (conforme fuera expresado en la audiencia de fecha 27/10/23 y en igual tenor, en las actas presentadas).

Bajo este entendimiento, en el marco de la audiencia celebrada (y luego con la presentación de las actas que lucen a fs. 5266/5278 y fs. 5279/5290), las partes expresaron mutuo consentimiento en relación a este instituto, conforme los siguientes términos, reparación y reglas de conducta:

1) Domingo Tomas GOENAGA, asistido por su defensa oficial, y el Fiscal General interviniente, manifestaron de común acuerdo su voluntad de someter el presente proceso en relación al instituto de suspensión de juicio a prueba por el **PLAZO DE TRES AÑOS** (art. 76 bis Código Penal), bajo las siguientes condiciones que deberá cumplir el imputado:

a) Fijar residencia, presentándose, durante el término de la duración de la suspensión, una vez por mes ante el Patronato de Liberados, o autoridad similar correspondiente, informando cualquier cambio de domicilio que realice en el futuro (art. 76 ter primer párrafo e inc. 1° art. 27 bis, ambos del Código Penal);





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

b) Abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas durante el término de la suspensión (art. 76 ter primer párrafo e inc. 3° art. 27 bis, ambos del Código Penal);

c) Realizar trabajos no remunerados por el término de tres años, en razón de tres horas semanales, en favor de una institución de bien público o privada de igual tenor (en este caso, debiendo resultar acreditable su carácter altruista). Se acuerda la posibilidad de optar por una donación de \$500.000 (pesos quinientos mil) en sustitución de las tareas mencionadas, destinadas a la Fundación CIAN (a ser depositados en la siguiente cuenta bancaria de la entidad: Banco Patagonia; Alias: PADRE.TRIGO.COMETA; CBU: 0340053100530007197002; Cuenta: CC \$ 053-530007197-000; CUIT: 30-71123679-8). La Fundación CIAN es una organización de la sociedad civil sin fines de lucro, destinada a la atención Integral de los Niños, que nace en el año 2009 en Bahía Blanca, especialmente destinada a los niños con desafíos del desarrollo (como trastornos del espectro autista -TEA-, trastornos específicos del lenguaje -TEL-, trastornos del aprendizaje y retrasos madurativos y discapacidad intelectual vinculados o no a síndromes genéticos -Down, Angelman, Rett, West, etc.-), lo cual se traduce en un beneficio mensurable para la sociedad en su conjunto. Dicho monto, de optar por tal alternativa, deberá ser depositado en su totalidad dentro del quinto día en que la concesión de la suspensión de juicio a prueba quede firme, o bien en hasta diez cuotas consecutivas e ininterrumpidas iguales, a pagarse dentro del quinto día hábil de cada mes a contar desde el momento en que la resolución referida adquiera firmeza (art. 76 ter primer párrafo e inc. 8° art. 27 bis, ambos del Código Penal);

d) Reparar el daño causado, a ser soportado en forma solidaria por todos los imputados de la causa (art. 31 y 76 bis, tercer párrafo, del Código Penal), más allá del acuerdo al que arriben los mismos entre sí a los efectos de su pago (ver punto I.2).

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

2) Juan PIPKIN, asistido por sus defensores particulares, y el Fiscal General interviniente, manifiestan de común acuerdo su voluntad de someter el presente proceso en relación al instituto de suspensión de juicio a prueba por el **PLAZO DE TRES AÑOS** (art. 76 bis Código Penal), bajo las siguientes condiciones que deberá cumplir el imputado:

a) Fijar residencia, presentándose, durante el término de la duración de la suspensión, una vez por mes ante el Consulado Argentino de la ciudad de su residencia, o autoridad similar correspondiente, informando cualquier cambio de domicilio que realice en el futuro (art. 76 ter primer párrafo e inc. 1º art. 27 bis, ambos del Código Penal);

b) Abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas durante el término de la suspensión (art. 76 ter primer párrafo e inc. 3º art. 27 bis, ambos del Código Penal);

c) Realizar trabajos no remunerados por el término de tres años, en razón de tres horas semanales, en favor de una institución de bien público o privada de igual tenor (en este caso, debiendo resultar acreditable su carácter altruista). Se acuerda la posibilidad de optar por una donación de \$400.000 (pesos cuatrocientos mil) en sustitución de las tareas mencionadas, destinadas a la institución INCUDI (Instituto de Custodia y Adaptación para Disminuidos Psicofísicos), cuyos datos resultan los siguientes: Domicilio Mitre 709, Bahía Blanca; CUIT: 30-55161976-8, Apoderado: Ernesto Horacio IPARRAGUIRRE, Datos de la cuenta bancaria de la institución: Número de Cuenta: 6207-15313/1; CBU: 0140460301620701531318 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, la cual se trata de una Asociación Civil sin fines de lucro fundada en Bahía Blanca dedicada a la atención integral de personas con discapacidad cognitiva y/o motriz. Dicho monto, de optar por tal alternativa, deberá ser depositado en su totalidad dentro del quinto día en que la concesión de la suspensión de juicio a prueba quede firme, o bien en hasta diez cuotas

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

consecutivas e ininterrumpidas iguales, a pagarse dentro del quinto día hábil de cada mes a contar desde el momento en que la resolución referida adquiera firmeza (art. 76 ter primer párrafo e inc. 8° art. 27 bis, ambos del Código Penal);

Sobre este punto, en el marco de la audiencia de visu, el Sr. Pipkin indicó que, de ser posible, preferiría realizar la donación al Hogar Mamá Margarita, en lugar de la institución INCUDI. Por su parte, el MPF manifestó que le interesa saber si tal institución recibe subsidios del Estado, dado que intenta ayudar a las instituciones que no cuentan con aportes o subsidios gubernamentales. Si estas instituciones no llegaran a recibir esos aportes o subsidios, él no se opondría a que la donación se realice allí. Allí, el Sr. Presidente indicó que se enviará un oficio para certificar la situación, y si se confirma que reciben subsidios, se establecerá en la sentencia correspondiente. Si no tienen subsidio, como propone el imputado, se continuará de esa manera. Extremo que contó con la anuencia expresa de Pipkin.

A fs. 5201 obra agregado correo electrónico proveniente de la institución Mamá Margarita indicando que efectivamente reciben fondos del Estado.

d) Reparar el daño causado, a ser soportado en forma solidaria por todos los imputados de la causa (art. 31 y 76 bis, tercer párrafo, del Código Penal), más allá del acuerdo al que arriben los mismos entre sí a los efectos de su pago (ver punto I.2).

I.2.Reparación del daño común a todos los involucrados:

En cuanto a la reparación del daño causado por la asociación ilícita (en los términos de los artículos 29 del Código Penal), las partes acordaron un monto común a todos los imputados y su pago de forma solidaria, de conformidad con el art. 31 del Código Penal, sin perjuicio del acuerdo privado al que arriben los mismos entre sí a los efectos de su pago.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Para determinar la cuantía de la reparación, se acordó partir del monto informado en la pericia contable realizada a título de instrucción suplementaria por el Cuerpo de Peritos Contadores Oficiales del Centro de Asistencia Judicial Federal, del 21 de noviembre de 2018 (obrante a fs. 4634/4662). En la misma, se determinó el monto del perjuicio fiscal irrogado al Fisco, partiendo de las facturas emitidas por las empresas calificadas como “usinas” (CVP INDUSTRIA SA, M-MAGNA SA, ATTIMO BAHÍA BLANCA SA, E& J ARGENTINA SRL, SCARSUR BAHIA SA EN FORMACIÓN y BAHÍA ACOPLAR SA EN FORMACIÓN) y del resultado de las fiscalizaciones respecto a las empresas usuarias que se comprobó que efectivamente emplearon las facturas emitidas por tales “usinas”. Así se determinó que el monto total de los ajustes practicados a las empresas usuarias (cuya discriminación individualizada obra en el informe pericial), ascendió por el Impuesto a las Ganancias y por el Impuesto al Valor Agregado a \$ 33.483.112,28 y por Salidas No documentadas a \$ 7.900.160,05. Es decir un monto total de \$ 41.383.272,33 [equivalente, de acuerdo al valor de compra publicado en el Banco Nación Argentina al día de la pericia² del dólar estadounidense³ a la suma de USD 1.172.330,66, la cual convertida de acuerdo al valor de compra publicado en el Banco Nación Argentina al día 25 de octubre de 2023 del dólar estadounidense⁴, equivale \$ 407.384.904,35]. Sin perjuicio de ello, del informe pericial surge que gran parte de esos ajustes fueron conformados por los mismos contribuyentes y, en su caso, pagados o incluidos en planes de pago (algunos en curso) o compensados con saldos a favor. En concreto, ello sucedió con ajustes por un total de \$ 25.147.057,92 por Impuesto a las Ganancias e Impuesto al Valor Agregado, y \$ 7.538.128,03 por Salidas No Documentadas. Por lo tanto, la suma antes informada se reduce al monto total de los ajustes no conformados por los contribuyentes, que se determinó en la pericia en la suma de **\$ 8.698.086,38** [equivalente, de acuerdo al valor de compra publicado en el Banco Nación Argentina

² 21 de noviembre de 2018.

³ 1 USD equivalente a \$ 35,30.

⁴ 1 USD equivalente a \$ 347,50.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

al día de la pericia⁵ del dólar estadounidense⁶, a la suma de USD 246.404,71, la cual convertida de acuerdo al valor de compra publicado en el Banco Nación Argentina al día 25 de octubre de 2023 del dólar estadounidense⁷ equivale a **\$ 85.625.636,72**].

Sin perjuicio de la suma indicada, las partes pusieron de manifiesto que, dada la fecha del informe pericial y ante la posibilidad de que se hayan registrados pagos posteriores al mismo, para determinar la cuantía del daño a reparar y en definitiva la suma a pagar en tal concepto, que puede variar en más o, sobre todo, en menos, de la suma indicada, se solicita que se intime a la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General Impositiva) que, a partir de los ajustes y deudas contempladas en la pericia contable referida, informe el monto total de los ajustes que permanezcan impagos, y que consigne los respectivos intereses y la actualización que corresponda a la fecha, informando la suma total que corresponda ser abonada, detallando cada concepto. A partir de esa determinación, la reparación deberá ser saldada -ya sea por el monto de **\$ 85.625.636,72**, como tope, establecido como perjuicio en la presente causa de acuerdo al parámetro indicado, o en el valor de la deuda que consigne la AFIP en caso que ésta sea menor que la suma recién indicada- en un plazo que no deberá ser superior al de noventa días a contar desde que la eventual sentencia condenatoria adquiera firmeza, bajo apercibimiento de requerir la ejecución de los bienes del imputado en la parte proporcional que, de acuerdo a su responsabilidad en los hechos le corresponda y, eventualmente, de no lograrse dicho cometido, requerir la revocación de la Suspensión del Juicio a Prueba acordada.

Por otra parte, el Fiscal General sostuvo que, sin perjuicio de la posición que asuma la querrela en relación a la solución acordada al presente caso, la Administración Federal de Ingresos Públicos (Dirección General Impositiva), deberá manifestar, una vez determinado ese monto, en el plazo de un mes si acepta el pago o no en tales condiciones. Y, para el caso de que la AFIP se niegue a recibir dicha suma

⁵ 21 de noviembre de 2018.

⁶ 1 USD equivalente a \$ 35,30.

⁷ 1 USD equivalente a \$ 347,50.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

cancelatoria, habrá de requerirse que esta sea depositada, a la orden del Tribunal en un plazo fijo, para evitar su depreciación, hasta tanto la cuestión administrativa quede zanjada, pudiendo los aquí imputados oponer las acciones que se entablen al respecto por haber hecho efectiva su voluntad de pago.

II. Y CONSIDERANDO:

Para una mejor claridad expositiva se analizará, en primer lugar, la solicitud de juicio abreviado presentada por las partes y luego las peticiones de suspensión de juicio a prueba.

LIBRO I: DE LOS ACUERDOS DE JUICIO ABREVIADO

De la admisibilidad del juicio abreviado

Tal como se señaló, el día 27 de octubre pasado se realizó la audiencia “de visu” con los imputados, tomando contacto personal y directo con ellos, observando la inmediación requerida en la especie, contando allí con la presencia de sus respectivos Defensores, del Ministerio Público Fiscal y la parte querellante Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP).

En esa oportunidad se le brindó a **Juan Ignacio Suris, Eduardo Suris y Nicolás Ibarra Gutiérrez** la posibilidad de declarar sobre el procedimiento abreviado y se les consultó respecto a la comprensión del suceso atribuido –su materialidad–, su participación en él, la calificación legal y pena propuesta como respecto a la modalidad de ejecución en cada caso, ante lo cual todos expresaron haber comprendido los hechos que se les imputó, el alcance de los acuerdos y sus consecuencias, prestando su consentimiento para el trámite elegido, el grado de participación asignado y las penas que les corresponderían, y reconocieron haber alcanzado el acuerdo de manera libre y voluntaria.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Que de acuerdo a lo previsto por el art. 431 bis inc. 3 del Código Procesal Penal de la Nación, corresponde analizar si el acuerdo arribado por las partes resulta formalmente admisible, para fundar la aplicación del juicio abreviado que desplaza el desarrollo del debate oral y público contemplado en el ordenamiento procesal.

El mecanismo del juicio abreviado introducido por la ley N° 24.825 en el año 1997 es un régimen de condenación negociada entre las partes que presenta una marcada dicotomía, por un lado, un aspecto inquisitivo que fuera muy criticado por la doctrina, dada la exigencia al imputado a que admita los hechos materia de acusación o que directamente confiese o se declare culpable, y, por otro lado, a la par, un carácter de neto corte acusatorio al habilitar un campo de negociación entre acusador y acusado (v. Langer, Máximo. "La dicotomía acusatorio-inquisitivo y la importación de mecanismos procesales de la tradición jurídica anglosajona. Algunas reflexiones a partir del procedimiento abreviado" en Maier, Julio B.J. y Bovino, Alberto, comps. *El procedimiento abreviado*. Ed. Del Puerto, Buenos Aires, 2001, p. 115 y ss. Ver también "La larga sombra de las categorías acusatorio-inquisitivo" en *Revista de Derecho Público*, N°32, Universidad de los Andes, Colombia, Enero - Junio de 2014).

Con este mecanismo el juicio normal se abrevia, es decir, se "acorta" el proceso justamente porque no se realiza el juicio oral (debate). El consenso sobre el hecho y la pena torna innecesario el juicio por no haber controversia entre las partes.

De allí que la calidad epistémica de la sentencia sea distinta, utiliza un método de comprobación diferente que no surge del debate sino de las pruebas producidas en la etapa instructoria, en orden a la hipótesis fáctica con la que las partes logran acordar y que fuera sostenida durante los actos anteriores de la instrucción, por lo que no se violenta el principio de verdad real. En estos casos, dependerá de si la investigación previa al juicio fue exhaustiva y se recopilaron pruebas suficientes y pertinentes para llegar a una conclusión.

Con ese alcance lo regula el art. 431 bis inc. 5° que señala que la sentencia deberá fundarse en "*las pruebas recibidas durante la instrucción*" y, en su caso, en la admisión o conformidad del imputado, asistido por su defensor, sobre la existencia del





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

hecho y la participación de aquel, descriptas en el requerimiento de elevación a juicio y la calificación legal recaída.

En relación al rol del Tribunal, la etapa de juicio se encuentra enmarcada por el principio acusatorio, erigiendo al Juez como verdadero tercero imparcial entre las partes, lo cual viene dado por normas constitucionales (conf. arts. 18, 24, 75 inc. 22 y 118 de la CN; 26 de la DADDH; 10 y 11.1 de la DUD; 8.1 y 8.5 de la CADH; y 14.1 del PIDCyP) y el objetivo de la transformación iniciada con la implementación progresiva dispuesta del Código Procesal Penal Federal (cfr. Leyes 27.063, 27.146, 27.150 y 27.482 y las res. 2/19, 1/20 y 1/21 de la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación del Congreso Nacional).

A su vez, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha afirmado que la Constitución Nacional estableció como objetivo legal un proceso penal acusatorio y con participación popular en el precedente "Casal" (Fallos: 328:3399).

Sabido es que la característica principal del sistema de enjuiciamiento penal acusatorio es la división de los poderes ejercidos en el proceso: por un lado, el acusador, quien persigue penalmente y ejerce el poder requirente, por el otro, el imputado, quien puede resistir la imputación ejerciendo el derecho de defenderse y, finalmente, el Tribunal, que tiene en sus manos el poder de decidir.

En el caso del mecanismo dispuesto por el artículo 431 bis del Código Procesal Penal de la Nación, el **rol del Tribunal recae solo en analizar la viabilidad y fundamentación del acuerdo al que arribaron las partes para que pueda desplazar el desarrollo del debate oral y público.**

La potencialidad de la función jurisdiccional se ve limitada por la existencia de contradicción, es decir, controversia planteada por las partes ante el juez y que "... cualquier ejercicio de ella que trascienda el ámbito trazado por la propia controversia jurídica atenta contra la esencia misma de la etapa acusatoria de nuestro modelo de enjuiciamiento penal" (Conf. CSJN, causa 5530, "Amodio, Héctor L.", del 12/06/2007, consid. 12 disid. de los Dres. Zaffaroni y Lorenzetti). Asumir la posición contraria implicaría colisionar con los principios que rigen nuestro sistema de





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

enjuiciamiento penal acusatorio, en particular el *ne procedat iudex ex officio* y la prohibición de la actuación judicial *ultra petita*.

De allí que ese estándar normativo debe ser considerado como marco referencial aplicable a los casos que tramitan en la justicia penal nacional.

Por lo tanto, atendiendo a los criterios reseñados y ante la inexistencia de contradicción, si la valoración efectuada por la Fiscalía, para fundar los términos de los acuerdos arribados entre las partes alcanza a cubrir la exigencia de fundamentación -lo que ocurre en el presente caso-, no corresponde a la jurisdicción obstar la aplicación de esa solución alternativa al debate oral.

En consecuencia, excepto en aquellos casos en que los acuerdos de juicio abreviado solicitados por las partes no se encuentren debidamente fundados (art. 69 “*a contrario sensu*” del CPPN), o se adviertan circunstancias de importancia que justifiquen su rechazo, especialmente en relación a la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o a una palmaria discrepancia con la calificación legal admitida o respecto de la inclusión de institutos en el acta que no hacen en sí a las previsiones del art. 431 bis del CPPN, entiendo que corresponde aceptar lo acordado por las partes.

Bajo este prisma, se advierte que la propuesta de juicio abreviado formulada por las partes se adecua a los requisitos previstos en el art. 431 bis del CPPN. Ello en tanto, la descripción de los hechos formulada resulta ajustada a los datos fácticos incorporados durante la instrucción y los elementos probatorios valorados se aprecian suficientes para tener por acreditada la materialidad del ilícito siendo, además, que el delito por el que se acusa y la pena impuesta a los nombrados se encuentra dentro del marco objetivo que prevé la norma (431 bis, CPPN); sumando a ello, teniendo en cuenta el carácter transaccional de los acuerdos, que se llegó a ellos en función de un consenso arribado a través del acuerdo concertado previamente y que no se advierte vicio alguno que pudiera afectar la libre voluntad de los imputados, ni la concurrencia de supuesto alguno de aquellos que autorizan a rechazar los acuerdos suscriptos, sea por necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o por discrepancia fundada con

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

la calificación legal, corresponde **declarar formalmente admisible los acuerdos arribados por las partes.**

PRIMERA CUESTIÓN: Materialidad de los hechos y participación responsable de los imputados.

Preliminarmente, se destaca que el reconocimiento expreso y libre de los imputados respecto de los hechos y su responsabilidad, acordado con el Ministerio Público Fiscal, relegan las facultades del juzgador a un examen del acuerdo limitado exclusivamente a su legalidad, razonabilidad y correspondencia con el material probatorio en el que se sustenta.

A la luz de esta premisa, adelanto que la conformación de la maniobra delictiva y el rol desplegado por los nombrados que ostentaban dentro de la estructura organizada, encuentra apoyatura en múltiples elementos de prueba incriminatoria reunidos a lo largo de la instrucción, que fueron mencionados y valorados en el requerimiento de elevación a juicio y en las actas acuerdo admitidas.

Así entonces, a partir de aquellos elementos de juicio colectados y evaluados de conformidad con la sana crítica racional, tengo por acreditado –con el grado de certidumbre apodíctica que requiere el dictado de un pronunciamiento condenatorio– que desde el 22 de abril de 2004 –fecha en que se constituyó la primera sociedad–, hasta el año 2012, Juan I. Suris, Eduardo Suris y Nicolas Ibarra Gutiérrez –al menos⁸–, conformaron una asociación criminal mantenida en el tiempo, cada uno con distintos roles y funciones, destinada a la creación de sociedades comerciales con características comunes, las cuales si bien fueron constituidas -o iniciadas su constitución, desde el punto de vista formal, no sólo carecían de capacidad operativa y financiera para

⁸ Tengo en consideración que, si bien la teoría del caso descripta en los requerimientos de elevación a juicio de ambas partes acusadoras, los miembros de la asociación no se limitarían únicamente a Juan I. Suris, Eduardo Suris y Nicolas Ibarra Gutiérrez, los términos de los acuerdos de juicio abreviado y los pedidos de suspensión de juicio a prueba, fijan un coto aquí a la valoración de posible participación de otros consortes.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

desarrollar las actividades declaradas, sino que directamente no realizaban actividad comercial real.

El objeto de la creación de las sociedades era emitir y comercializar facturas apócrifas a través de operaciones simuladas de compraventa de bienes y/o servicios a terceros contribuyentes que sí ostentaban una actividad comercial real, a fin de permitirles a éstos últimos (usuarios de las facturas apócrifas) disminuir su carga tributaria, al computar dichas facturas en su contabilidad.

Para proceder a la contabilización de las operaciones y simular sus pagos, en gran cantidad de los casos, las empresas usuarias emitían o entregaban cheques por el monto de las operaciones declaradas en favor de las sociedades “usinas”, los cuales en numerosos casos eran depositados pero inmediatamente retirados de las cuentas bancarias de las mismas (al solo efecto de dejar constancia bancaria de las operaciones).

Quedó acreditado que las sociedades creadas por los imputados, pese a estar legalmente constituidas, inscriptas o con el trámite de inscripción iniciado –y amén de no realizar actividad comercial real–, eran integradas con el capital mínimo exigido por las reglamentaciones, con actividades materialmente imposibles de ejecutar si se tiene en consideración el escaso capital social integrado al momento de la creación, sin personal obrero ni profesional idóneo declarado, sin bienes de uso registrables o contratados, con objetos sociales amplios y heterogéneos, en muchas de ellas.

Adicionalmente, se constató que dichas empresas presentaban una ausencia de promoción de actividades, sin líneas telefónicas ni inscripción en guías comerciales o industriales, lo cual es demostrativo de la ausencia de actividad comercial real. Siendo tales características un patrón común de todas las usinas de facturas apócrifas creadas por los imputados.

La estrategia implementada de constitución de sociedades con perfiles comerciales variados –tales como publicidad, empresas de construcción, servicios inmobiliarios, consultoría empresarial, comercialización de equipos o arrendamiento de maquinaria, entre otros– reflejaba una táctica diseñada con el propósito exclusivo de





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

abarcara un amplio espectro de sectores comerciales para emitir y comercializar facturas a empresas de diversos rubros.

Las sociedades ficticias creadas:

A continuación, se especificará la composición, operaciones y el rol que desplegaron dentro del esquema delictivo cada una de las sociedades creadas. Ellas son: CVP INDUSTRIA S.A., E&J ARGENTINA SRL, ATTIMO BAHIA BLANCA S.A., M-MAGNA S.A., SCARSUR BAHIA S.A. EN FORMACIÓN y BAHIA ACOPLAR S.A. EN FORMACIÓN.

I

1. CVP INDUSTRIA SA - CUIT No 30-71104427-9

Esta Sociedad fue fiscalizada bajo Orden de Intervención N° 670.762.

Constituida mediante Escritura N° 37 de fecha 11/03/2009 (fs. 15/21-OI 670762) por Juan Ignacio Suris y Nicolas Ibarra Gutiérrez, con domicilio fiscal en Valentín Gómez N° 2886, Planta baja, Departamento 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lugar en el cual nunca pudo hallarse a un responsable de la firma.

Formada con un capital social de \$ 12.000; inscribiéndose en la AFIP-DGI el 29/07/2009, en las siguientes actividades: construcción, reforma y reparación de obras de infraestructura del transporte NCP desde 07-2009, reciclamiento de desperdicios y desechos metálicos y no metálicos desde 10-2010; venta al por mayor de equipos de sonido, radio y televisión, comunicaciones y sus componentes, repuestos y accesorios desde 01-2011; venta al por mayor de art. de ferretería desde 01-2011 y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones desde 01-2011.

Al inicio de la fiscalización (OI 670.762) había presentado la DDJJ del Impuesto a las Ganancias, período fiscal 2009 con un impuesto determinado a favor de la AFIP de \$ 170,85 que al momento de aquella auditoría no había sido cancelado.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

El total de ventas, servicios y locaciones declarados asciende a \$ 1.672.142, obteniendo un resultado contable de \$ 12.817,15 presentada por la Cra. Nora Adelina Wheitt (fallecida).

Respecto a las DDJJ de IVA exteriorizaron débitos similares a los créditos fiscales. No se determinaron saldos a favor del Fisco.

El 28/09/2011 se notificó el inicio de la fiscalización bajo la orden de Intervención N° 670.762 al apoderado de la firma, Cr. Rogelio Chanquia. Mediante multinota recibida el 16/03/2012 (f. 260), el apoderado expresa que los libros contables, sociales y subdiarios de IVA (2009- 2010) no se aportan por ausencia física de los mismos, desconociendo tanto su eventual existencia como (en caso de existir) el domicilio de residencia de la fuente documental o digital, no se registró ni verificó existencia real de bienes de uso, de cuentas a cobrar; respecto a los talonarios de Facturas “A” y “B” entregadas, las mismas no reconocerían contraprestación de servicio alguna que justifique su inclusión en DDJJ de IVA o Ganancias, consecuentemente se procedió a rectificar la totalidad de las DDJJ de IVA llevando a cero los valores anteriormente registrados; respecto de comprobantes de compras y gastos ante la inexistencia de operaciones económicas realizadas, no se reconoció la existencia de comprobantes de compras o gastos vinculados con efectivas prestaciones de servicios, razón por la cual no se aportaron y rectificándose la totalidad de DDJJ de IVA llevando a cero los valores anteriormente registrados.

La inspección detectó 618 comprobantes de los 1300 que han sido impresos, los que representan el 47,53%. El total neto facturado ascendió a \$ 47.683.311,20 (fs. 237/246 cpo. Verif. II-OI 670762).

Algunos de los conceptos consignados en las facturas relevadas fueron los siguientes: desarme, inspección, reparación de noria con silos incluidos; reparaciones de autos y camiones; provisión de pontón, movilización de personal, equipamiento de perforación de suelos en agua, provisión de dos lanchas disponibles en todo horario con chofer diariamente más una tercera estacionada para asistencia en pontón, todo con sus respectivas y correspondientes autorización de navegación; provisión de grúas y

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

montaje de equipo sobre montón, equipo de soldadura para fijación de equipo perforador a pontón, etc; alquiler de grúa de 30 tn y equipo de soldar; artículos para la construcción: cemento, cal, ladrillos huecos, arena, escombros, etc; provisión de mano de obra para tareas de albañilería; servicios de grúas de 80 y 60 tn; servicio de traslado de máquinas con carretones; movimiento de suelo; Venta de chatarra; provisión de equipamiento para perforación; Dirección y asesoramiento técnico para la construcción del conducto subterráneo; traslados de vehículos; trabajos de albañilería y provisión de carretones.

La auditoría concluyó en el marco de la Orden de Intervención sobre esta empresa, que *“es imposible pensar que una sociedad que no posee bienes de ningún tipo preste los servicios facturados. La sociedad ha iniciado actividades sin bienes y de la documentación relevada no se han detectado compras de bienes o contrataciones para prestar los servicios facturados. Asimismo, el responsable ha manifestado la falta de actividad de la firma y se han rectificado las declaraciones juradas de IVA exteriorizando la falta de actividad económica...”*, circunstancias que determinaron a la AFIP-DGI a incluir a esta firma en la base de emisores de facturas apócrifas.

2. M-MAGNA SA - CUIT N° 30-71129742-8

Fiscalizada bajo Orden de Intervención N° 644.280.

Constituida mediante Escritura N° 149 de fecha 15/10/2009 entre Juan Ignacio Suris y Nicolas Ibarra Gutiérrez, con domicilio en Valentín Gómez 2886, Planta Baja, Departamento B de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde nunca pudo hallarse ningún responsable.

Juan Ignacio Suris era el administrador de relaciones de clave fiscal y con poder general de administración y disposición otorgado por Nicolas Ibarra Gutiérrez a su favor.

El objeto social era dedicarse por cuenta propia, de terceros o asociados a terceros en la República Argentina o en el extranjero a las siguientes actividades:





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

montajes industriales, montajes de maquinarias, producción, fabricación, transformación de estructuras metálicas, cañerías de alta, media y baja presión, cortes hidrométricos, etc.

El capital social era de \$ 12.000 representado por 12.000 acciones ordinarias suscripto por los socios de la siguiente forma: 10.800 acciones para Juan Ignacio Suris (Presidente) y 1.200 para Nicolas Ibarra Gutiérrez (Vicepresidente). Constituyeron domicilio fiscal en Maure No 1576, Piso 6, Departamento Q de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y ante la intimación de la fiscalización de la AFIP-DGI, el correo señaló que la dirección era inexistente.

Las actividades en las cuales se inscribió en AFIP eran especializadas en construcción NCP; venta al por mayor de equipos de sonido, radio y televisión, comunicaciones y sus componentes, repuestos y accesorios; ventas al por mayor de art. de ferretería y servicios relacionados con la electrónica y las comunicaciones.

El inicio de la inspección se notificó al Cr. Rogelio Chanquia, apoderado de la firma, el 12/08/2011, quien presentó un poder especial para gestiones administrativas que le fuera entregado por Juan Suris el 02/08/2011.

Al igual que en el caso de CVP INDUSTRIA S.A. al requerir a M-MAGNA S.A. en el marco de la fiscalización iniciada, libros contables, sociales y subdiarios de IVA, balance del ejercicio 2010; detalle de los bienes de uso al 31/12/2010; Inventario de las cuentas a cobrar al 31/12/2010; etc. el apoderado de la verificada expresó: "*No se ha registrado actividad económica alguna de M-Magna S.A durante el ejercicio económico en cuestión, razón por la cual se procedió a rectificar las DDJJ F.731 indicando tal realidad, tanto en lo que hace a los débitos como a los créditos fiscales, reflejando en 0 (cero) los movimientos aludidos*", también señaló no existir el balance solicitado, ni bienes de uso, ni cuentas a cobrar y que "*dada la actividad económica nula de M-MAGNA SA no se registran cheques pendientes de cobro o pago relativos al cumplimiento del objeto social de dicha sociedad*". Adjuntó "*copias de facturas emitidas y posteriormente anuladas por haberse verificado la inexistencia de las*





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

operaciones que le dieran origen a las mismas. No se puede localizar la radicación documental del resto de las facturas requeridas...".

De la información relevada, se observó que la firma había emitido Facturas "A" por un importe neto de \$ 5.584.330,87 durante el periodo 03/2010 a 07/2011, localizándose 161 facturas de las 250 impresas en los allanamientos practicados.

La firma no poseía bienes inmuebles ni muebles registrables y del análisis de los cheques aportados a la fiscalización se observó que fueron cobrados por los usuarios de las facturas apócrifas emitidas por la empresa (cf. fs. 197/198 cpo. Fiscalización del contrib.), lo cual corrobora que solo se extendían para simular los pagos de las operaciones.

En las facturas relevadas se consignaron los conceptos: servicios de grúas de 80 y 60 tn; servicios de tijeras hidráulicas para montaje eléctrico, provisión de carretones; asistencia mecánica y reparaciones varias de diversas unidades con repuestos incluidos; alquiler de andamios y provisión de mano de obra para armado y desarmado; desmontaje de caja reductora y hélice de ventilador; provisión de 3 autoelevadores de 7 tn; servicio de traslados con carretones de máquinas viales; servicio de maquina retro y zanjadora; provisión de camión con hidrogrua para movimiento de válvulas conforme se observa en copias de facturas adjuntas de fs. 149 a 184 del citado cuerpo.

En el informe final de inspección se concluyó que se debía proceder a la carga de la empresa en la base de proveedores apócrifos ("e-apoc"), la auditoría señaló que *"es imposible pensar que una sociedad que no posee bienes de ningún tipo preste los servicios facturados. Si analizamos el primer estado contable confeccionado por el ejercicio irregular cerrado el 31/12/2009 la firma inicia actividades con \$ 3000 en efectivo y un crédito de \$ 9000 que se conforma por las cuentas particulares de los socios, \$ 8.100 de Juan Suris y \$ 900 de Nicolás Ibarra Gutiérrez. En consecuencia, la sociedad ha iniciado actividades sin bienes y de la documentación relevada no se han detectado compras de bienes o contrataciones para prestar los servicios facturados.*





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Asimismo, el responsable ha manifestado la falta de actividad de la firma y se han rectificado las declaraciones juradas de IVA exteriorizando la realidad económica”.

3. ATTIMO BAHÍA BLANCA SA - CUIT N° 30-71100774-8

Esta empresa fue fiscalizada bajo Orden de Intervención N° 670.761.

Fue constituida en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 11/03/2009 por Flavio Carrano (Presidente) y Nicolas Ibarra Gutiérrez (vicepresidente) conforme surge de la Escritura N° 36 de fs. 81/87 del legajo relativo a la OI N° 670.761.

Se constituyó con un capital social de \$ 12.000, con domicilio fiscal en Valentín Gómez 2886, Planta Baja, Departamento 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, confiriéndole poder general de administración y disposición a Juan Ignacio Suris con fecha 02/02/2010 mediante Escritura No 37 (fs. 113/119 Leg. Fiscaliz. I).

La sociedad se inscribió en la AFIP el 22/06/2009 en la actividad de "Servicios de Publicidad" y el administrador de relaciones de clave fiscal es Flavio Carrano (fs. 14-OI 670.661).

Con las facturas de ventas aportadas y la información obrante en los sistemas de la AFIP-DGI, se observó que emitieron Facturas "A" por un importe neto de \$ 7.197.337,90 desde 06/2009 a 12/2011 (fs. 204 del legajo de la O.I. no 644280 que respalda la carga en la base e-Apoc).

El Cr. Chanquia por multinota de fecha 30/09/2011, en relación al requerimiento labrado al inicio de la fiscalización manifestó que ante la ausencia de evidencias que indiquen lo contrario, procedió a rectificar en 0 (cero) la totalidad de las DDJJ de la contribuyente. La firma sólo ingresó a las arcas del fisco un pago de \$ 200 en concepto de IVA.

Según las facturas relevadas algunos de los conceptos facturados son “*auspicio publicitario en comercial deportivo de midget*”, “*diseño de impresión de folletería comercial e institucional*”, “*presentación en animación 3D*”, “*publicidad gráfica en auto de carrera TN Clase 2*”, “*presentación de auto de carrera*”, “*promociones en*





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

pista carpa del equipo de TC 2000 (distintos pilotos)", "contrataciones de distintos artistas", "publicidad en la vía pública", conforme copias obrantes en los tres cuerpos auxiliares de facturas emitidos por ATTIMO BAHÍA BLANCA de 516 fojas.

Como conclusión de lo expuesto, la AFIP expresó en su informe final que "estamos en presencia de una sociedad creada al solo efecto de emitir y comercializar facturas, debido a que no posee bienes de ningún tipo, el domicilio declarado es un departamento en un edificio de capital federal, donde nunca se halló a persona alguna, en los años que presentó DDJJ fueron en cero o con resultados a su favor o débitos y créditos fiscales similares, no posee libros contables, nunca presentó balance alguno, libros de IVA, documentación respaldatoria (sólo las facturas emitidas y comercializadas), no tiene empleados, pagó solamente desde que inició la supuesta actividad solamente \$ 200. Además el apoderado y actual asesor y auditor de la firma, presentó rectificativas en cero de todas las DDJJ de IVA presentadas desde la fecha de inscripción de la sociedad hasta el 2011, debido a que no pudo evaluar ninguna documentación ni libros de esta firma, confirmando con esto la inexistencia de todas las operaciones de compra y venta".

4. E & J ARGENTINA SRL- CUIT N° 30-70942228-

Fiscalizada bajo Orden de Intervención N° 613.982

Constituida el 01/08/2005 entre Juan Ignacio Suris y Eduardo Suris, con un capital de \$ 3.000. Inscripta en las siguientes actividades: explotación de patentes de invención y marcas, diseños y modelos industriales nacionales y/o extranjeros, etc. así como también en las actividades de mandataria, financieras e inmobiliarias.

Las actividades en las cuales se inscribió en la AFIP son: servicios inmobiliarios realizados por cuenta propia con bienes propios o arrendados NCP, construcción, reforma y reparación de edificios residenciales, servicios empresariales NCP, servicios de gestión y logística para el transporte de mercaderías, cría de ganado bovino excepto en cabañas y para la producción de leche, movimiento de suelos y





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

preparación de terrenos para obras NCP y venta al por mayor de pescado (fs. 274 Leg. Fiscaliz. II - OI 616.127).

En el marco de la fiscalización los inspectores se constituyeron en el domicilio fiscal y una persona que no accedió a identificarse manifestó que desconocía si la sociedad tenía domicilio en la vivienda, ya que se trataba de un domicilio particular **(de la hija de Eduardo Suris)** y que Juan Suris estaba casado y no vivía ni desarrolla actividad alguna en ese domicilio (fs. 363 cit. Leg.).

También determinó dicha auditoría que E&J ARGENTINA SRL. no poseía bienes, ni tampoco había declarado empleados.

El socio gerente, administrador y representante era Eduardo Suris, quien autorizó al Cr. Domingo Goenaga para la inscripción de la misma. Recién el 19/05/2008 concluyó la constitución de la SRL, interviniendo el Cr. Daniel Alguacil. El domicilio fiscal constituido era Agustín Álvarez No 1228 de Bahía Blanca. En el estado de Situación Patrimonial de Constitución al 15 de junio de 2006, el Cr. Goenaga informó en el Anexo I que los estados contables allí detallados representaban razonablemente la situación patrimonial de la firma y puede leerse que los Bienes de Uso aportados por los socios a la sociedad estaba compuesto por: 15 andamios de construcción, 5 tablas de madera y 10 uniformes para obrería completos, totalizando un importe de \$ 3.000 (cf. f. 140/141 del pte. Cpo. de fiscaliz.).

En el informe final de inspección obrante a fs. 369/381 del cit. Leg., se aclaró que en el domicilio fiscal no se encontró ningún tipo de documentación ni de registro de la misma y la escasa información obtenida de la firma se obtuvo del allanamiento realizado en el estudio del Cr. Goenaga. Asimismo se determinó que la firma no poseía bienes ni declaraba empleados.

En tal marco, fue consultado el contador Alguacil, quien manifestó que asesoró contable e impositivamente a la firma desde el 28/05/2007 hasta el año 2009, cancelando la relación el 16/11/2009 por falta de pago de los honorarios, aportando listados de IVA Ventas (hoja 1/13) e IVA Compras (hoja 1/11) que van del 10/2008 al 11/2009.

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

El 15/02/2012 el apoderado de la firma, contador Rogelio Chanquia, en el marco de la fiscalización, manifestó que *"en el período bajo inspección no se han podido verificar por parte de esta auditoría contable la existencia de operaciones o prestaciones de servicios efectuadas por el contribuyente aludido, asimismo, al no contar con libros contables, sociales, subdiarios de IVA ni documentación respaldatoria alguna, me encuentro imposibilitado de dar cumplimiento a los puntos 1 a 8 del requerimiento de referencia, razón por la cual -ante la ausencia de evidencias que indiquen lo contrario informo que he procedido a rectificar en cero la totalidad de las DDJJ de IVA"* (obran a fs. 368 del cpo. fiscalización II).

Con respecto al crédito fiscal que se registró en el Libro de IVA Compras se observaron compras a proveedores apócrifos (fs. 11/21 cpo. carga base e-Apoc de la firma-OI 613.982).

Con la documentación secuestrada en los allanamientos, más los registros de IVA Ventas obtenidos, se reconstruyó la operatoria de la firma que emitió Facturas "A" por \$ 4.752.070,11 desde el 10/2008 al 05/2011 (fs. 225 cpo. Cit.).

5. SCARSUR BAHIA SA en formación -CUIT N° 30708740841-

La firma fue fiscalizada bajo la Orden de Intervención N° 613.970.

De la Escritura N° 51 de fecha 22 de abril de 2004 obrante a fs. 89/96 del cpo. de fiscalización OI N° 613.970, surge que SCARSUR BAHIA S.A. fue constituida por Juan Ignacio Suris (Director Suplente) y Sergio Luis Scarabotti (Presidente), con un capital social de \$ 12.000. Los socios constituyeron domicilio social en Misiones N° 347 de Bahía Blanca. No obstante a fojas 20 del legajo II referido a la OI N° 613970 obra copia de contrato de locación del inmueble sito en Donado N-97 Piso 1 Dpto M de la misma ciudad suscripto entre Sergio Luis Scarabotti en carácter de Presidente de SCARSUR BAHIA S.A. y Domingo Tomas Goenaga.

La empresa se inscribió en los siguientes rubros: "PUBLICIDAD, AGROPECUARIO: explotación en todas sus formas de establecimientos agrícola-ganadero, frutícolas y de granjas, establecimientos de estancia para invernadas y/o cría





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

de ganado, tambos y cabañas. Almacenamiento en silos de granos y todo tipo de cereales, la forestación y reforestación. CAZA Y REPOBLACIÓN DE ANIMALES: comercialización en todas sus formas de piezas de caza, asesoramiento, venta de insumos relacionadas con la actividad. COMERCIAL: mediante la compra, venta, permuta, importación y exportación y distribución de insumos, equipos herramientas, materiales y mercaderías en general y todo tipo de indumentaria, ropería en general y calzado como también comestibles y sus derivados, etc. REPRESENTACIÓN Y MANDATOS, CONSTRUCTORA: compra venta de materiales de construcción en general, así como también acero, madera, chapas, tejas, losas y productos en general relacionados con la construcción de todo tipo de obras; herramientas y prestación de servicios de montajes (grúas, auto-elevadores, hidrogruas, etc.). TRANSPORTE: de cargas en general, mercaderías o sustancias alimenticias propias o de terceros en vehículos propios o de terceros. FINANCIERA: mediante préstamos con o sin garantía real o personal, etc.

En el contrato social se autorizó al Cr. Domingo T. Goenaga juntamente con el presidente para que actuando indistintamente, realicen los trámites pertinentes para su conformación e inscripción ante la autoridad de contralor pertinente.

El 02/09/2009 (fs. 102/106 del cit. Cpo.), vendieron su paquete accionario a Héctor Domingo Seijas (Presidente) y Sandra Ester Mena (Director Suplente), ambos con domicilio en Tierra del Fuego esq. Figueroa Alcorta s/no de Bahía Blanca, en \$ 12.000, siendo el contador Domingo Goenaga quien solicita la inscripción del convenio de transferencia de acciones, según nota del 5/11/09 de fs. 101 del legajo referido a SCARSUR BAHIA S.A.

La auditoría fiscal señaló en el informe de carga en base e-Apoc que la última declaración jurada de IVA presentada al vencimiento, era la correspondiente al periodo 09/2007 donde se declaran débitos y créditos fiscales nulos (v. DDJJ a fs. 124/155 cit.ac.), pero el 21/08/2009 se rectificaron las siguientes DDJJ: Periodos 04/2005 a 06/2005, 08/2005 a 05/2007; 07/2007 y 08/2007; los importes facturados por la empresa durante el periodo 04/2005 a 08/2007 ascendieron a la suma de \$

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

4.710.474,23 y la firma Estudio de Ingeniería Reyes y Asociados SA era el principal cliente, con un importe neto facturado de \$ 142.259.936,38, lo que representó un 48% del total, cuyo asesor contable era el Cr. Goenaga.

Respecto del Impuesto a las Ganancias, la última declaración jurada presentada fue la correspondiente al periodo 2008, presentándose el 09/12/2008 las declaraciones juradas de ganancias adeudadas desde el periodo 2004 a 2008 con los siguientes impuestos determinados a favor de la Dirección: 2004 \$ 4.725; 2005 \$ 6.650; 2006 \$ 8.750; 2007 \$ 12.250 y 2008 \$ 10.762,50, los que al momento de ser fiscalizada se encontraban impagos.

6. BAHIA ACOPLAR SA en formación - CUIT N° 30710188994-

Fue fiscalizada bajo la Orden de Intervención N° 510.325, en cuyo marco se la cargó en la base de emisores de facturas apócrifas.

Sociedad anónima constituida mediante escritura pública N° 417 el 08/06/2007 entre Eustaquio Santa Cruz (Presidente) y Nicolas Ibarra Gutiérrez (Director Suplente).

El domicilio fiscal fue fijado en Donado 97, Piso 1, Oficina M de esta ciudad (estudio contable del Cr. Domingo Tomas Goenaga). El domicilio social fue fijado en Ruta N° 3 Sur, Km. 693. Fue constituida con un capital social de \$ 12.000.

El objeto social correspondía a montajes y obras de ingeniería, contratista de obras de gran envergadura, ingeniería civil, construcción y comercialización de materiales, industrialización de materiales, servicios, publicidad y propaganda, mandataria. Con fecha 18/03/2008, a fs. 34/35 del legajo "Datos de inscripción" de la firma, obra copia del contrato de Transferencia de Acciones de Bahía Acoplar SA entre Eustaquio Santa Cruz y Pablo Martin Girotti.

A fs. 37 del cpo. cit., por Escritura N° 138 de fecha 18/03/2008, se procede a designar un nuevo directorio, el que quedó formado de la siguiente manera: Presidente: Nicolas Ibarra Gutierrez y Director Suplente: Pablo Martin Girotti y se faculta al Cr.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Goenaga a diligenciar y registrar ante la Dirección Provincial de Personas Jurídicas las modificaciones expresadas.

Esta sociedad se inscribió en la AFIP en las siguientes 15 actividades: Fabricación de estructuras metálicas para la construcción desde el 06/2007; servicio de publicidad y alquiler de equipos de construcción o demolición dotado de operarios desde 12/2008.

No poseía empleados, ni bienes registrables, ni se observó capacidad operativa para una empresa dedicada a fabricar estructuras metálicas o alquiler de equipos de construcción o demolición dotado de operarios.

La fiscalización concurrió al domicilio social y una persona que no se identificó manifestó desconocer a la firma fiscalizada, funcionando allí una metalúrgica bajo el nombre de CAPE SA (fs. 5 cpo. Verif. -OI 510325).

II

Además de la evidencia presentada del material probatorio surgen cuentas bancarias operadas por aquellas sociedades que coadyuvan a la reconstrucción de lo sucedido. Si bien no se detectaron cuentas bancarias a nombre de SCARSUR BAHÍA SA ni de E & J ARGENTINA SRL ni de BAHIA ACOPLAR S.A.; si se verificó la existencia de cuentas bancarias abiertas a nombre de las restantes firmas en la sucursal Universitario de Bahía Blanca del Banco de la Provincia de Buenos Aires: N° 50.172/5 perteneciente a ATTIMO BAHÍA BLANCA S.A. (Período analizado 12-2009 a 07-2011); N° 50.144/2 perteneciente a CVP INDUSTRIA SA. (Período analizado 09-2009 a 07-2011); N°50.191/6 perteneciente a M-MAGNA S.A. (Período analizado 03-2010 a 07-2011). A continuación se refleja el importe ingresado en cada una de ellas:

Cuenta corriente de ATTIMO BAHÍA BLANCA S.A.....	\$ 1.735.204,51
Cuenta corriente de CVP INDUSTRIA SA.....	\$ 5.794.008,28
Cuenta corriente de M-MAGNA S.A	\$ 3.882.128,69
Total de acreditaciones bancarias	\$ 11.591.341,48

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

En la OI 741.401 obran hojas de trabajo confeccionadas por el fisco, con el detalle de los números de cheques, la fecha de emisión, la fecha de pago, el beneficiario, el importe, la fecha del débito y la identificación de los endosos emitidos por CVP INDUSTRIA SA, M-MAGNA SA y ATTIMO BAHÍA BLANCA SA, respectivamente (fs. 130/131, 134/135 y 138)

Los saldos que se mantienen en las citadas cuentas corrientes son de ínfima significatividad durante todo el periodo analizado. Esta circunstancia y el hecho que los depósitos se corresponden con una extracción inmediata de similar importe -más allá, que se trate de varios cheques- demuestran que las acreditaciones obedecen a la necesidad de “simular” el pago de las pretendidas operaciones y que los inmediatos débitos corresponden a la devolución de esos “pagos simulados”.

Por otro lado, integra el cuadro cargoso del objeto de la acusación y pondero aquí los hallazgos correspondientes a los *usuarios* de las usinas mencionadas.

Todo lo cual me lleva a concluir que con los elementos que se vienen consignando en los párrafos anteriores ha sido comprobado que las sociedades creadas por esta asociación ilícita lograron comercializar facturación apócrifa a más de 190 usuarios, quienes -con el fin de minimizar su carga fiscal-, han computado gastos y/o créditos fiscales respaldados con comprobantes de aquellas empresas que fueron catalogadas por el Organismo Recaudador como usinas en la presente causa (ver. fs. 230/231 y 448/453).

La Administración Federal de Ingresos Públicos llevó a cabo las correspondientes auditorías sobre los usuarios -receptores-. Los hallazgos de dichas auditorías, que se han incorporado al expediente, concluyeron que, en efecto aquellos, hicieron uso de facturación falsa (conf. informes de la AFIP obrantes a fs. 764/778, 783/787, 987/993, 1002/1009, 1010/1020, 1021/1031, 1046/1059, 1082/1084, 1198/1199, entre otros, y órdenes de intervención reservadas en Secretaría).

En tales fiscalizaciones se concluyó que las empresas calificadas como “usinas” en realidad eran proveedores ficticios determinando que fueran impugnados los créditos fiscales atribuidos a los mismos. En tal marco, gran parte de los





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

contribuyentes usuarios reconocieron la falsedad de las operaciones implicadas mediante la presentación de las declaraciones juradas rectificativas.

Cobra especial consideración el informe pericial contable que consta en las fojas 4634/4662. Allí se determinó que el daño fiscal infligido al erario público, derivado del uso de facturas emitidas por CVP Industria SA, M-Magna SA, Attimo Bahía Blanca SA, E& J Argentina SRL, Scarsur Bahia SA en formación; y Bahía Acoplar SA en formación, teniendo en cuenta los resultados de las auditorías realizadas a las empresas *usuarias* que incluyeron dichas facturas en sus declaraciones juradas, superó los cuarenta millones de pesos (\$ 41.383.272,33, valuado al momento de los hechos).

A la pluralidad de los elementos cargosos glosados al presente expediente, se suma el reconocimiento de la operatoria descripta realizado por el propio imputado (Juan Ignacio Suris) quien en el marco de su declaración indagatoria manifestó: *"Quiero dejar en claro que todos los movimientos con las empresas citadas fueron 100% en su totalidad inexistentes y el modo de operación para la cancelación de la misma factura fue de la siguiente forma: el titular de cada empresa me extendía un cheque de la misma a la orden de una de mis empresas la cual era la que supuestamente le había realizado el trabajo u obra que nunca existió, luego el valor era endosado por mi empresa, cobrado en su totalidad según cual fuere el monto de la factura negociada, dado que así la ley lo exige, que la operación tiene que ser bancarizada; una vez cobrado el valor se le devolvía en su totalidad el dinero al titular del cheque o de la empresa que se había hecho la venta de la misma y mi empresa se quedaba con un porcentaje previamente negociado, previamente acordado, que oscilaba entre un 15, 20 o un 30% del 21% del IVA. Se puede constatar por ejemplo en el Bco. Provincia de Alem (suc. Barrio Universitario) que por ejemplo hay depósitos realizados por \$ 500.000 a las 13 horas y a las 13:02 retirado el mismo, no habiendo existido ni siquiera el físico del dinero, dado a que si así fuere si el físico existiese, no te alcanzarían los dos o tres minutos para contar \$ 500.000 o para hacer semejante movimiento de plata; como por ejemplo con la empresa MATFERROSO SA,*

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

empresa de chatarra de Bahía Blanca, lo cual demuestra muy claro y transparente que es una venta de facturación y en varias oportunidades... se realizaron varias operaciones similares de ésta índole; así como dichas oportunidades he tenido que utilizar servicio de cadetería o pedirle que me cobre algún valor con un conocido, dado a que el sistema no te pagan valores mayores a los \$ 50.000 diarios a una misma persona".

De la intervención de los imputados en los hechos

Tras haber detallado la operatoria ejecutada por la Asociación ilícita criminal a través de las usinas de facturas apócrifas, se impone abordar la participación que le cupo a cada uno de sus miembros dentro de la propia organización, como paso crucial para elucidar el grado de involucramiento y responsabilidad de cada uno de ellos en las acciones que conformaron las maniobras explicadas.

Cabe aclarar que, dado los términos de las presentaciones efectuadas de conformidad con los acuerdos de juicio abreviado y los pedidos de suspensión de juicio a prueba, si bien la teoría del caso descripta en los requerimientos de elevación a juicio de ambas partes acusadoras, los miembros de la asociación no se limitarían únicamente a Juan I. Suris, Eduardo Suris y Nicolas Ibarra Gutiérrez, el alcance de los acuerdos mencionados fijan un coto aquí a la valoración de posible participación de otros consortes. En consecuencia, en esta sección solamente se analizará y evaluará exclusivamente la participación en los hechos de los nombrados, dejando al margen cualquier valoración atinente a Juan Pipkin y Domingo Goenaga, a quienes se les dará tratamiento en Libro II, *infra*.

Juan Ignacio Suris

La evidencia colectada, que se detalla a continuación, es demostrativa de que el nombrado orquestó la operatoria, coordinó y acordó con las empresas usuarias cómo ejecutar las transacciones simuladas, proporcionó los medios para fingir los pagos que daban apariencia de legitimidad a tales transacciones. Suris, era el responsable de la





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

faz ideológica de las maniobras, quien reclutó y asoció al negocio ilegal a las personas necesarias de su confianza y dirigió los miembros de la asociación.

En efecto, Juan Ignacio Suris constituyó junto con Sergio Luis Scarabotti, SCARSUR BAHIA S.A. EN FORMACIÓN (22/04/2004); junto a Eduardo Suris, E&J ARGENTINA S.R.L. (01/08/2005); y junto a Nicolas Ibarra Gutiérrez las firmas CVP INDUSTRIA S.A. (11/03/2009) y M-MAGNA SA. (15/10/2009). Era Presidente de CVP INDUSTRIA S.A. y M-MAGNA S.A., fue Director Suplente de SCARSUR BAHIA S.A. EN FORMACION.

Domingo Tomás Goenaga, en oportunidad de ser indagado manifestó en relación a Suris que él le solicitó la constitución de SCARSUR BAHIA S.A., liquidando para ésta impuestos, así como también que lo hiciera para CVP INDUSTRIA S.A. y M-MAGNA S.A. luego del fallecimiento de Nora Wheitt. En acta del fecha 06/10/2011 (cuyas copias se adjuntan a fs. 22/24 del Legajo de Fiscalización I acompañado el 27/08/2013), Goenaga manifestó que a pedido de Juan Suris también liquidó impuestos de BAHIA ACOPLAR S.A. durante los períodos 2007 y 2008 y contestó algunos requerimientos de AFIP-DGI.

De igual modo, al ser indagado Flavio Carrano le atribuyó la responsabilidad a Juan Ignacio Suris manifestando que él le propuso la formación de ATTIMO BAHIA BLANCA S.A. quien a su vez manejó todo lo relativo a esa sociedad; refirió que fue al Banco Provincia Sucursal Universitaria donde “Juan tenía todo armado” y firmó; señaló –haciendo alusión a Suris- que la plata era de él al igual que la sociedad.

En su declaración indagatoria ampliatoria Nicolas Ibarra Gutiérrez manifestó ser amigo de Juan Ignacio Suris desde hacía muchos años y que fue él quien le planteó que necesitaba una persona de confianza para constituir empresas, y varias personas más para ello. El dinero de los cheques que cobraba se lo daba a Juan Suris o a la persona que éste le indicaba. También Eduardo Suris y Juan Pipkin lo sindicaron como la persona a quien respondían.

Por otra parte, Hugo Osvaldo Kaiser, titular de la imprenta que intervino en la confección de los talonarios de facturas de CVP INDUSTRIA S.A., manifestó que eran





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

solicitados por Juan Suris, conforme luce a fojas 303 del legajo Anexo Usuarios 2 y a fojas 35 del Anexo Usuarios 9 obra Multinota también de Hugo Osvaldo Kaiser del 17/05/2011 en la que manifestó que respecto de M-MAGNA SA la impresión la encargó Juan Suris, siendo la forma de pago efectivo.

La reconstrucción de lo sucedido se compadece con lo manifestado de manera coincidente por parte de los responsables de las empresas usuarias que señalaron a Juan Suris como la persona con la que trataban en relación a las operaciones que -a la postre- se determinaron que eran ficticias. En efecto, la responsable de BAHIA VERDE SERVICIOS S.A., Vanina Fardighini, señaló que el supuesto servicio con las empresas E Y J ARGENTINA S.R.L y CVP INDUSTRIA S.A. eran contratados con Juan Suris a quien contactaba, conforme fojas 263 del legajo Anexo Usuarios II. Por su parte, el responsable de RESCO S.R.L. refirió que respecto a la relación comercial con CVP INDUSTRIA S.A. se contactó con ellos Juan Ignacio SURIS (conforme fojas 1 del Anexo Usuarios 6 acompañado el 27/08/2013).

En idéntico sentido, Agustin Ricardo Gonzalez, Ingeniero civil en el acta de fojas 27 del legajo de Fiscalización I O.I. N° 616.127 acompañado el 27/08/13, sindicó a Juan Ignacio Suris como la persona a quien contacta con la finalidad de obtener crédito fiscal para computarlo contra sus débitos fiscales a cambio de cheques emitidos por él. Respecto a los cartulares girados contra la cuenta corriente del Banco Provincia de CVP INDUSTRIA S.A. en las que apareció su firma como endosante manifiesta que fueron cobrados por Juan SURIS o Nicolas IBARRA GUTIERREZ.

Asimismo, a fojas 3/6 de tal legajo obran cheques del Banco Supervielle emitidos a la orden de CVP INDUSTRIA S.A endosados por Juan Suris, como Presidente de CVP INDUSTRIA S.A. y luego en forma individual.

Completa la reconstrucción objetiva de lo sucedido la información suministrada por la Sucursal Universitaria del Banco de la Provincia de Buenos Aires -agregada a fojas 122 del Cuerpo de Fiscalización de CVP INDUSTRIA S.A. O.I. N° 670.762- que refleja que en la cuenta de CVP INDUSTRIA S.A. N° 50144/2 operaba en forma conjunta Juan SURIS -en carácter de Presidente- y Nicolas Ibarra Gutiérrez -en su





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

carácter de Vicepresidente-, siendo el domicilio de envío de correspondencia Alsina N° 381, Piso 1 de Bahía Blanca, residencia que resultó -por aquel entonces- el domicilio particular de Juan Ignacio SURIS circunstancia que se verificó al momento de practicarse los allanamientos. Termina de ilustrar lo expuesto que la entidad bancaria informó respecto de la cuenta N° 50.191/6 de M-MAGNA S.A. que sobre ella operaban, en forma indistinta, su Presidente Juan Suris y el Vicepresidente Nicolas Ibarra Gutiérrez.

Conforme se observa en Acta N° 031000201163562602 obrante a fojas 17/18 del Legajo de Fiscalización N° 1 y en Acta 031000201147327501 de fecha 16/02/2012, Juan I. Suris reconoció a su vez que no prestó ningún servicio.

A fojas 30 del Cuerpo de Fiscalización N° 1 O.I N° 616.127- el propio Juan Ignacio Suris solicitó a los funcionarios de del Organismo recaudador que las sociedades CVP INDUSTRIA S.A., ATTIMO BAHIA BLANCA S.A., EY J ARGENTINA S.R.L., M-MAGNA S.A. y SCARSUR BAHIA S.A. sean incorporadas en la base e-apoc a efectos de impedir que terceros desconocidos sigan utilizando las facturas de estas empresas.

A este cúmulo de pruebas corresponde añadirle la obtenida en el allanamiento de su vivienda particular donde se secuestraron siete (7) cajas con documentación relacionada a las firmas investigadas en la presente causa, conforme detalle glosado a fojas 716/731 que resulta dirimente para acreditar su participación de Juan Suris en los hechos atribuidos.

Es también significativo, en punto a la materialidad de la maniobra endilgada, como a la responsabilidad que le cupo por los hechos atribuidos el reconocimiento efectuado por el imputado en el marco de los acuerdos de juicio abreviado y también los realizados a lo largo de toda la pesquisa. Recuértese que en la oportunidad de recibir a Juan Suris en indagatoria (fs. 1378/1381), relató en detalle las maniobras de la usina de facturación apócrifa e indicó que *"el desarrollo que cumplían los integrantes de las mismas sociedades eran 100% bajo mi responsabilidad"*. Asimismo, el imputado admitió que *"la información volcada en las DDJJ fueron acercadas por mí*

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

y yo era el que les decía lo que hacer o no y en el caso que había que tomar alguna determinación, Goenaga no tenía ni voz ni voto, sí le he escuchado algún consejo profesional, pero nada más. Asimismo funcionaban todas las empresas integradas por mí, el único responsable era yo, dado que eran mías en su totalidad y sin depender de nadie para tomar alguna resolución administrativa, económica o de cualquier índole y en las sociedades que figuro el único que realizaba la facturación era yo, así igual en E&J, BAHIA ACOPLAR, y las relacionadas con mi causa”.

En conclusión, el plexo probatorio colectado en estos actuados expuesto en los párrafos que preceden permite reconstruir y afirmar de manera inequívoca que Juan Suris fue el arquitecto y principal responsable de la ejecución de los hechos ilícitos descriptos y atribuidos a esta asociación ilícita, diseñando y coordinando las transacciones ficticias, como ideológico de la asociación, orquestando las maniobras que se han desglosado en la presente.

Eduardo Suris

La vinculación de Eduardo Suris en la actividad delictiva ventilada se encuentra acotada a las directivas del Juan Ignacio, situación que tampoco ofrece dudas. Conforme surge del material probatorio que se detallará, quedó acreditado que el nombrado participó y contribuyó en la operatoria de las sociedades ficticias, coadyuvando a su creación y funcionamiento, distribuyendo y comercializando facturas apócrifas y ejecutando gestiones administrativas esenciales para el desarrollo de la asociación.

En efecto, Eduardo Suris constituyó junto con Juan Suris, E Y J ARGENTINA S.R.L., de la cual era socio gerente, administrador y representante.

Fue sindicado por el contador Daniel Alguacil como administrador y representante de esa sociedad, quien manifestó además que fue él que lo contrató como asesor contable e impositivo de la sociedad (fojas 362 del Cpo. Fisc. II O.I. N° 616.127).





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

En el carácter citado otorgó Poder Especial para gestiones administrativas a Rogelio Chanquia mediante Escritura N° 236 del 11/08/2011 (fojas 39 del Cpo. de Fisc. I O.I N° 613.982).

Pondero además, que el nombrado solicitó la última impresión de talonarios de facturas de CVP INDUSTRIA SA -firma con la que no tendría vinculación aparente-, tal como lo expuso Hugo Osvaldo KAISER (fs. 303 Leg. Anexo Usuarios II)

Integra el cuadro cargoso las manifestaciones efectuadas por el contador Alguacil quien expresó que asesoró contable e impositivamente a la firma desde el 28/05/2007 hasta el año 2009, cancelando la relación el 16/11/2009 por falta de pago de los honorarios, aportando listados de IVA Ventas (hoja 1/13) e IVA Compras (hoja 1/11) que van del 10/2008 al 11/2009. Asimismo dijo que siempre actuó y habló como administrador y representante de la firma el señor Eduardo Suris quien fue el que lo contrató (fs. 362 cpo. Cit.).

Coadyuva a la tesis incriminante acerca de su vinculación funcional y aporte en la organización criminal la circunstancia de que, por lo menos tres de las usuarias de facturación apócrifa, lo identificaron -a Eduardo Suris- como la persona con la que mantenían contacto en el marco de las operaciones. En efecto, el responsable de PROINSAL S.A. -quien contabilizó facturas de CVP INDUSTRIA S.A., E&J ARGENTINA SRL., y BAHIA ACOPLAR S.A.- señaló que era Eduardo Suris la persona con la que se contactaba ya sea para vender, acordar qué precios, cobrar, etc.; asimismo, Meyer SACIF mencionó como número de contacto de CVP INDUSTRIA S.A. los mismos números que fueran informados como pertenecientes a Eduardo Suris por el imprentero Hugo Kaiser. Por último, en la fiscalización realizada a BAHIA ACOPLAR S.A. -de la que se concluyó con su carga en la base e-apoc.- la firma ALCALIS DE LA PAGATONIA S.A. manifestó que el contacto sobre el desarrollo de las tareas fue realizado por Eduardo Suris y otro, conforme luce a fojas 130 y ss. del Cuerpo de Fiscalización I de BAHIA ACOPLAR S.A. OI N° 510.325.

Toda la evidencia desarrollada es demostrativa de la circunstancia de que, Eduardo Suris, intervino en la distribución de comprobantes de las otras sociedades,





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

además de integrar desde lo formal una de las sociedades que funcionaron como emisoras de facturación apócrifa (E Y J ARGENTINA S.R.L.).

En definitiva, el cúmulo de pruebas presentadas demuestra de manera irrefutable su participación activa en la creación y operación de las sociedades ficticias, así como su rol en la distribución de facturas falsas y en la realización de trámites administrativos cruciales para el entramado delictivo.

Nicolas Ibarra Gutiérrez

Al igual que sucede Eduardo Suris, según se desprende del material probatorio detallado a continuación, quedó demostrado que participó en la creación de las entidades ficticias, integrándolas y realizando trámites administrativos indispensables para el desenvolvimiento de la asociación.

En efecto, Nicolas Ibarra Gutiérrez integró cuatro de las seis sociedades implicadas, ostentando en ellas roles relevantes. En el año 2009 constituyó con Juan Ignacio Suris CVP INDUSTRIA SA y M-MAGNA SA; con Flavio Carrano, ATTIMO BAHÍA BLANCA S.A. y en el año 2007 constituye BAHÍA ACOPLAR SA (en formación). Es Vicepresidente del Directorio de las primeras sociedades citadas y Presidente de la última.

Intervino activamente en la maniobra de simulación de pagos librando y cobrando una importante cantidad de cheques. Tal es así que está identificado como uno de los individuos que percibió la mayor cantidad de cheques que se utilizaban para simular pagos dentro de la empresa ATTIMO BAHIA BLANCA S.A. (cf. f. 1314). Asimismo, cobró cheques al portador, librados contra la cuenta de CVP INDUSTRIA S.A. (cf. f. 1325vta.).

En su declaración indagatoria ampliatoria explicó que es amigo de Juan Suris desde la niñez, que éste *“le plantea que necesitaba una persona de confianza porque necesitaba constituir empresas y necesitaba para ello a varias personas”*. En conclusión, Juan Suris lo eligió como hombre de confianza para formar las empresas mencionadas, desempeñando roles ejecutivos y colaborando activamente en las





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

actividades delictivas: efectuando simulacros de pagos, librando y cobrando una importante cantidad de cheques. Por consiguiente, su participación en la asociación ilícita queda claramente evidenciada.

Todo lo afirmado en este apartado se complementa con los reconocimientos efectuados por los imputados, lo que permite corroborar que los hechos descriptos existieron y la conducta delictiva fue llevada a cabo por todos ellos, tal como lo manifestaron en la audiencia respectiva donde expusieron los términos de los acuerdos de juicio abreviado celebrados y ratificados conforme el artículo 431 bis del CPPN.

A su vez, en dicha oportunidad, manifestaron conocer plenamente el contenido y alcance de los acuerdos convenidos, ratificándolos expresamente en todos sus términos, no advirtiéndose vicio alguno que pudiera haber afectado la libre manifestación de sus voluntades, quienes fueron asistidos por sus defensas y con pleno conocimiento de las responsabilidades que derivan de estos acuerdos.

Entonces, las probanzas aludidas en los apartados anteriores, aunadas al reconocimiento de todos los acusados hablan, a las claras, tanto de la existencia de los sucesos punibles enrostrados, como de las responsabilidades que les correspondió en el decurso causal de los hechos delictivos atribuidos.

SEGUNDA CUESTIÓN: Calificación legal aplicable.

I

En los acuerdos plasmados en las actas presentadas, el representante de la acusación pública tomó en consideración que, aunque en el momento de ser procesados y solicitada la elevación a juicio de los coimputados, los hechos fueron encuadrados en la figura de asociación ilícita fiscal (conforme lo estipula el art. 15 inc. "c" de la ley 24.769), atribuyendo a Juan Suris el rol de jefe y a los demás el carácter de miembros integrantes (cfr. fs. 1391/1430, 1857/1863, 2408/2428 y 2565/2578);





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

expresó que, tras analizar la prueba aportada, discrepa con la calificación jurídica inicial por la que fueron requeridos.

Explicó que, tal como se concluyó en la instrucción, entiende que los nombrados integraron una organización mantenida en el tiempo, con la logística necesaria para llevar a cabo sus fines, actuando con habitualidad, y destinada a cometer delitos indeterminados. Afirmó que la figura que mejor se adecúa y comprende a los hechos en tratamientos está dada por el artículo 210 del Código Penal (Asociación Ilícita) y no por la prevista en el Régimen Penal Tributario (art. 15 inc. “c”).

Mencionó que esta modificación, no implica una variación de la plataforma fáctica de los hechos imputados que permanecen incólumes, sino que obedece a que la disposición del Código Penal no exige una delimitación de los delitos al ámbito penal tributario. Bajo este espectro entendió que el accionar de la organización conformada por los imputados, no tuvo como finalidad delictiva única la comisión de los ilícitos reprimidos en el Régimen Penal Tributario (sancionados al momento de los hechos en la ley 24.769), sino *también* los previstos en otras leyes penales, razón por la cual entiende que la figura que mejor subsume el hecho es el artículo 210 del Código Penal.

Recordó que al momento de ser indagados se hizo saber que la finalidad de la organización no solo abarcaba la comisión de delitos tipificados en la ley penal tributaria sino también que abarcaba otros fines (*“todo ello, para posibilitar, facilitar o brindar la colaboración necesaria para la ejecución de algunos de los delitos tipificados en la ley penal tributaria; entre otras actividades que surgen de la prueba de cargo”*) y se detallaron los hechos y las pruebas que demostraba la forma de actuar de la organización.

Consideró que la finalidad de la misma asociación, dado su objeto (creación de sociedades, simulación de contratos, de pagos, de depósitos bancarios, circularización de valores, inscripciones ante la AFIP-DGI), también abarcaba otros delitos ajenos al régimen penal tributario (falsedades documentales, balances falsos, defraudaciones, entre otras).





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Sostuvo que incluso, sin que sea un requisito para la comprobación de la figura de la asociación ilícita, durante la instrucción, a raíz del accionar de los miembros de la organización, se formaron causas para investigar posibles ilícitos penales (ajenos al ámbito tributario) en los que habrían participado personal de entidades financieras y de otras sociedades comerciales como ya se señaló (causa FBB 11613/2014, caratulada "N.N. s/ averiguación de delito" y Sumario Administrativo del Banco Provincia N° 12.910) y también se agregaron actuaciones por el delito defraudación por administración infiel por hechos entre los años 2009 y 2010 en relación a otra sociedad comercial (causa N° 1290/2015 caratulada "Pierantoni, Huberto Diego Martin; Napoli, Cristian Alberto; Lavopa, Inés Teresa; Zunino, Daniel Fabián; Suris, Juan Ignacio s/ defraudación por administración infiel" agregadas en copia a fs.3646 y 3692).

Mencionó que el criterio expuesto encuentra respaldo jurisprudencial en el más alto tribunal especializado en materia penal, en un caso en el que los hechos imputados, como el presente, se habían subsumido durante la instrucción en el delito de asociación ilícita fiscal (art. 15 inc. "c" de la ley 24.769) y al momento de disponerse la condena de sus miembros se optó por la figura prevista en el artículo 210 del Código Penal (Conf. Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, sentencia del 30 de abril de 2013, causa n° 1680, caratulada "DI BIASE", la cual fue confirmada, en relación a las condenas aplicadas, por la Cámara Federal de Casación Penal en su sentencia de la Sala IV, sentencia del 04 de julio de 2014, en causa Nro. 970/2013 "DI BIASE, Luis Antonio y otros s/recurso de casación e inconstitucionalidad").

Recordó el MPF que en ese caso, y al igual que ocurre aquí, se trataba de un grupo de personas que constituyó sociedades comerciales que emitían y comercializaban con terceros usuarios facturación apócrifa (por operaciones simuladas), y el Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2 optó por la calificación señalada, en especial de acuerdo a las consideraciones desarrolladas en los considerandos 295 a 303 de la sentencia citada.

En el fallo aludido se puede leer que: *"las partes discutieron ampliamente durante el debate sobre la calificación legal que correspondía a los hechos traídos a*





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

juicio, oscilando entre las normas del art. 210 del CP y 15 inc. 'c' de la ley n° 24.769. [...] La circunstancia de que la ley 24.769 en la reforma de la ley n° 25.874 haya tipificado una concreta asociación ilícita no significa que el art. 210 del CP **no hubiera receptado también la comisión de delitos tributarios dentro de los delitos indeterminados de la asociación**. En el criterio de la Cámara de Apelaciones del Fuero que la Cámara Federal de Casación Penal compartió, en un caso de similares características al de autos, se sostuvo que la modificación del art. 15 de la ley n° 24.769 por la ley n° 25.784 no resultaba fundamento de atipicidad alguna para conductas cometidas con anterioridad a su vigencia pues la reforma sólo previó un tipo penal de mayor especificidad que el previsto por el art. 210 del CP, cuya constatación conminó con una escala penal más gravosa. En ese contexto, no resultaba adecuado considerar que el legislador hubiera pretendido incorporar un tipo penal por el cual se completase el ámbito de prohibición del art. 210 del CP sino que, por el contrario, aquella incorporación constituía una figura que conminaba con una escala penal más gravosa a supuestos particulares de asociación ilícita (caso "Palacios Alberto M.", ya citado). Por la contundencia de tales argumentos, el Tribunal los hace suyos. Los motivos que el legislador del año 2003 haya tenido para crear un tipo especial de asociación ilícita son independientes de la vigencia de la norma general del art. 210 del CP también aplicable a tales delitos" (el destacado es propio).

Prosiguió: "Otro argumento **advierde en el caso la improcedencia de adecuar típicamente las conductas de las mayorías de los imputados bajo la óptica del citado art. 15 incs. 'b' y 'c' de la ley n° 24.769**. En ese sentido, la norma en cuestión agrava la conducta del caso cuando la pluralidad de personas cometa delitos tributarios o esté destinada a la comisión de delitos de la propia ley n° 24.769. En el caso de autos, como se verá, tal como también lo reconoció la esforzada querella, **la organización del caso no sólo abarcó la comisión de delitos tributarios sino también otros de naturaleza común** (contrabando, falsedad documental, balances falsos, administración fraudulenta) [...] En consecuencia de ello, la asociación ilícita por





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

la cual serán juzgados los imputados será a la luz de la norma del art. 210 del CP

(los destacados y subrayados están plasmados en el acta acuerdo).

El titular de la acción -en relación a la significación jurídica asignada a los hechos en los acuerdos- afirmó que *“esto no implica modificar la plataforma fáctica en forma alguna, sólo una modificación de la calificación legal en la que se subsumen los mismos hechos, por una figura (dado el mínimo de la escala penal prevista), que resulta más beneficiosa para la parte imputada que la contemplada en el Régimen Penal Tributario”*.

Además expresó que el artículo 210 Código Penal contempla una figura que engloba y subsume la finalidad contemplada en la figura del art. 15 inc. “c” del Régimen Penal Tributario.

Sentado ello, precisó que se configuran en autos los requisitos típicos del art. 210 del Código Penal (la acción de formar parte o conformar una asociación criminal, el número mínimo de autores, y el fin de cometer delitos indeterminados).

Mencionó que *“el tomar parte en una asociación o banda”* se refiere a participar, ser miembro de la asociación, pertenecer a ella; y que se trata de un delito autónomo, formal y de peligro, no exigiendo para su configuración actividad material ni que los miembros se conozcan entre sí. Indicó que la acción típica se configura por el solo hecho de formar parte de la asociación, sin que sea necesario que ésta ejecute los delitos que formaban parte del acuerdo criminal.

Sostuvo que también se comprobó que la asociación contó con una estructura de carácter estable, que permaneció y perduró en el tiempo y que actuó con cohesión.

Consideró que, de la prueba reunida en la causa, no quedan dudas que Juan Ignacio Suris integró junto a los restantes imputados, cumpliendo cada uno de ellos sus respectivos roles, una asociación ilícita que reunió tales condiciones. Para tal fin crearon sociedades comerciales (se identificaron seis de ellas), llevando a cabo maniobras de comercialización de facturas apócrifas, simulación de operaciones, plasmando en documentos y los actos para poder proceder a su contabilización y otras actividades, perjudicando así principalmente al Fisco a través del uso de esas facturas





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

por los contribuyentes que adquirirían las mismas y que las hacían valer para obtener un crédito fiscal inexistente.

En particular, afirmó que Juan Ignacio Suris revistió el rol de jefe contemplado en el último párrafo del art. 210 del Código Penal. Ello se vio plasmado no solo porque fue quien constituyó y dirigió desde el punto de vista formal, las sociedades que funcionaron como “usinas” de facturas, sino también -y fundamentalmente- quien dirigió la operatoria, diagramó y negoció con las empresas usuarias la forma de implementar las operaciones simuladas, dispuso los medios para simular los pagos que permitían contabilizar tales operaciones, recibió los mayores beneficios y dio directivas a los restantes miembros de la asociación, los que también participaron con pleno conocimiento y voluntad sobre el alcance de la asociación ilícita aunque bajo la dependencia y directivas del nombrado. Conducta que asumió desde el mismo inicio de la asociación ilícita, siendo también quien seleccionó a sus integrantes y lideró su accionar a lo largo de toda la operatoria. Mencionó que el fundamento de la agravante establecida por el legislador para el caso de los jefes y organizadores de la asociación ilícita es que la conducta de quien manda u organiza una sociedad criminal es considerada como significativamente más grave que la de quienes se limitan a integrarla subordinándose a sus designios. Explicó que “*Jefes son los que mandan, los que tienen autoridad sobre otros miembros de la asociación, sin la obligación de rendir cuentas o requerir autorización, rol que quedó debidamente comprobado en relación al nombrado*”. Lo mismo ocurre con el elemento subjetivo del tipo penal, pues surge de manifiesto que el imputado conocía que conformaba una asociación ilícita, al punto que fue quien diagramó la operatoria desde su inicio, las sociedades que integró carecían de actividad comercial real y, pese a ello, comercializó facturas respecto a las cuales conocía la finalidad para la cual la empleaban los receptores y también conocía que las mismas carecían de correlato en la realidad.

Por su parte, consideró que tanto Eduardo Suris como Nicolás Ibarra Gutiérrez revistieron el rol de miembros de la figura del art. 210 del Código Penal, rol que quedó debidamente comprobado y detallado. Indicó que lo mismo ocurre con el elemento





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBF 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

subjetivo del tipo penal, pues surge de manifiesto que los imputados sabían que conformaba una asociación ilícita, al punto que las sociedades que integraron y participaron en su operatoria carecían de actividad comercial real y, pese a ello, comercializaron facturas respecto a las cuales conocían la finalidad para la cual la empleaban los receptores y también conocía que las mismas carecían de correlato en la realidad.

II

Así, en virtud de la plataforma fáctica que tuve por probada, no advierto obstáculos para acoger la pretensión punitiva propuesta por el Fiscal General –que obtuvo el consenso de las defensas particulares y los imputados–.

Para decidir de este modo tengo en cuenta que el principio acusatorio en que está apoyado nuestro sistema de enjuiciamiento penal me obliga a respetar el límite de pretensión punitiva que el Ministerio Público Fiscal entiende aplicable al caso, debiendo –únicamente- examinar si la opinión en la que la Fiscalía sustentó su postura supera el control de logicidad y fundamentación; exigencia ésta cuya observancia aprecio se verifica en el caso.

En efecto, el representante del Ministerio Público Fiscal ante esta instancia redefinió el juicio de subsunción legal de los hechos a la norma, compartiendo el grado de asunción al hecho asignado y manteniendo la coautoría atribuida y la calidad de jefe de Juan Ignacio Suris; todo ello tras una detallada exposición de los motivos por los que se arribaba a esa disímil consideración.

Los argumentos brindados por aquél además de superar –holgadamente– el estándar de motivación para validar su temperamento, resultan consistentes con las pruebas que integran la acusación y en función de las cuales los imputados han efectuado el reconocimiento de los hechos que documentan las actas acuerdo.

Entonces, al no encontrarse controvertido por las partes -a excepción del querellante, del cual me ocuparé en el acápite siguiente- la propuesta en la teoría del





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

caso formulada por la Fiscalía en lo atinente a la subsunción legal de los hechos, sin perjuicio de la opinión que este órgano jurisdiccional pudiese tener al respecto, tal circunstancia obliga a este Tribunal a respetar el límite de pretensión punitiva que el Ministerio Público Fiscal entiende aplicable al caso. Ello, en virtud del principio acusatorio que debe regir el procedimiento penal, conforme el bloque constitucional introducido en la reforma constitucional de 1994, a los demás tratados y convenciones que la República Argentina ha suscripto al respecto.

En efecto, en cuanto a la descripción típica de la figura contenida en el artículo 210 del Código Penal, la misma exige la presencia de tres elementos principales: a) la acción de formar parte o conformar una asociación criminal, b) un número mínimo de autores –tres o más personas–, y c) un fin delictivo; constituyéndose así un delito doloso, abarcando el dolo el conocimiento del número que compone la asociación y la finalidad delictiva de la misma.

En primer lugar, en cuanto a la significación de tomar parte en una asociación o banda se refiere a participar, ser miembro de la asociación, pertenecer a ella. La doctrina es conteste en considerar que se trata de un delito autónomo, formal y de peligro abstracto, que constituye una infracción de mera actividad, no exigiéndose para su configuración actividad material ni que los miembros se conozcan entre sí. La acción típica se configura por el solo hecho de formar parte de la asociación, sin que sea necesario que ésta ejecute los delitos que formaban parte del acuerdo criminoso (D’ALESSIO, Andrés, op. cit., p. 1033).

El delito de asociación ilícita es autónomo e independiente de los hechos por ella producidos (D’ALESSIO, op. cit., p. 1043; ZIFFER, Patricia, “Lineamientos básicos del delito de asociación ilícita”, La Ley, cita online: AR/DOC/9061/2001; BUOMPADRE, op. cit., p. 597; BORINSKY, Mariano Hernán y otros autores, “Régimen Penal Tributario y previsional...”, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2012, p. 86). Bajo este prisma entonces, el ilícito en trato, como tipo penal autónomo, se consuma cuando se materializa el acuerdo delictual entre los integrantes de la asociación ilícita, con la sola circunstancia de formar parte de la misma. Es decir, se reprime la calidad





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBF 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

de miembro de la asociación independientemente de que se consume la finalidad ilícita perseguida, no exigiéndose siquiera su comienzo de ejecución.

La existencia de la asociación debe formarse mediante acuerdo o pacto de voluntades comunes, en relación con una organización cuya actividad principal sea la de perpetrar hechos ilícitos en forma indeterminada (BUOMPADRE, Jorge Eduardo, “Manual de Derecho Penal. Parte especial”, op. cit., p. 596).

Asimismo, para que se configure el delito tipificado en el artículo 210 C.P., la asociación debe contar con una estructura objetiva, la cual debe tener carácter estable – permanente– y ser duradera en el tiempo (DONNA, Edgardo Alberto, Derecho Penal. Parte Especial. Tomo II–C, Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 2002, p. 300).

La permanencia distingue a la asociación ilícita de la convergencia transitoria típica de la participación, en la que se requiere un mero acuerdo criminal. Lo que el art. 210 del CP exige es una relativa estabilidad que revele la existencia de una contexto delictivo plural dedicado a un fin criminal.

Por lo demás, la organización requiere cohesión del grupo en orden a la consecución de los fines delictivos comunes, elemento que cabe considerar manifestado a través de la distribución y rotación de roles entre los integrantes de la organización (D’ALESSIO, op. cit. P. 1038).

En relación al elemento subjetivo del tipo, se trata de un delito doloso. El autor debe conocer que participa en una asociación de las características antes indicadas y debe tener voluntad de pertenecer a ella, con todas las reglas y normas que la asociación o banda tiene como estructura interna (DONNA, op. cit., p. 311).

III

Ahora bien, de la reseña de las conductas de cada uno de los imputados y de las características de la organización por ellos compuesta (ver supra acápite “II” –“Las sociedades ficticias”– y, así también, las precisiones efectuadas en el apartado siguiente “De la intervención de los imputados en los hechos”), tengo por acreditado





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

fuera de toda duda razonable que en el caso se configuran los extremos típicos exigidos por el art. 210 C.P. respecto de Juan Ignacio Suris, Eduardo Suris y Nicolas Ibarra Gutiérrez, es decir que los nombrados tomaron parte de un grupo organizado, estable y duradero en el tiempo, cada uno con distintos roles y funciones, cuya finalidad principal consistía en cometer delitos –principalmente de índole tributario– creando las sociedades comerciales mencionadas en el acápite anterior, con la logística necesaria para llevar a cabo sus fines espurios.

La prueba mencionada al analizar la materialidad de los hechos por los cuales son acusados cada uno según la distinta graduación atribuida a sus aportes individuales en la configuración del hecho común, resulta por demás demostrativa de la tipicidad que demanda el tipo penal de mención.

En efecto, todos los elementos que fueron reseñados al tratar lo atinente a la acreditación material resultan categóricos para ilustrar los aspectos típicos objetivos y subjetivos que perfeccionan el delito de asociación ilícita tipificado en el art. 210 del CP: la organización -compuesta por los 3 imputados- operó bajo el cobijo de diversas sociedades pantallas, llevando a cabo maniobras de comercialización de facturas apócrifas. La operatoria detectada consistió en la formación de sociedades carentes de actividad real, cuyo objeto principal era la distribución de facturas de tales firmas a terceros, generando una venta para éstos que se apropiaban de un crédito fiscal en IVA y una deducción de costo o gasto en ganancias inexistentes. Se acreditó que las facturas apócrifas eran vendidas por la organización a cambio de dinero a una gran cantidad de contribuyentes que las utilizaban a fin de acreditar gastos inexistentes ocultando las reales ganancias obtenidas en cada período fiscal y para registrar crédito fiscal inexistente.

El grado de cohesión y perdurabilidad requerido por el art. 210 del Cód. Penal se evidencia a través de la forma en que operaban, su organización y los roles asumidos por cada uno de los encartados, y la extensión en el tiempo de las maniobras aludidas, lo que les permitía una actividad ilícita continua.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

En cuanto a la finalidad típica -es decir, la existencia de una convergencia intencional destinada a la perpetración de reiterados hechos delictivos-, resulta razonable los motivos postulados por el MPF en cuanto a que dado el objeto de la asociación (creación de sociedades, simulación de contratos, de pagos, de depósitos bancarios, circularización de valores, inscripciones ante la AFIP-DGI), también abarcaba otros delitos ajenos al régimen penal tributario (falsedades documentales, balances falsos, defraudaciones, entre otras).

Sobre este punto, me detendré para realizar las siguientes consideraciones **en virtud de la oposición formulada por la AFIP** fundada en la subsunción típica de los hechos, quien oportunamente postuló la figura de asociación ilícita tributaria del art. 15-c, de la ley 24.769, Régimen Penal Tributario (RPT).

Sin pretensión de profundizar aquí en la distinción entre ambas figuras o efectuar teorizaciones doctrinarias propias de otros ámbitos, destacaré que nos encontramos ante tipos penales de naturaleza similar, con estructuras típicas análogas (requiere la misma cantidad de sujetos activos, la acción típica no presenta diferencia en cuanto a la estabilidad temporal y un acuerdo, no siendo suficiente la cooperación instantánea), siendo que los agravantes (en calidad de jefe y organizador) se encuentran presentes en ambas figuras, con la misma pretensión punitiva (de 5 a 10 años de prisión).

Cierto es que existe entre las normas una relación de especificidad pues mientras que el artículo 210 del CP castiga la pertenencia a una asociación ilícita con propósitos de cometer delitos previstos en cualquier normativa (va de suyo que incluye los delitos tributarios), el artículo 15 del RPT restringe dicha finalidad a la perpetración exclusiva de delitos estipulados en la propia ley penal tributaria.

La introducción del art. 15 inc. "c" en la normativa penal tributaria no implicó la incriminación de conductas respecto de las cuales existiera antes una laguna de punibilidad (cf. Guillermo Orce Gustavo F. Trovato, Delitos Tributarios, Abeledo Perrot, 2008, págs. 255/265). Aun con anterioridad a la sanción de la ley 25.874 (normativa que incorporó la figura penal cuyo encuadre la AFIP pretende), hechos





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

similares a los aquí juzgados -en términos llanos: la existencia de usinas de facturas apócrifas-, eran juzgados como constitutivos de una asociación ilícita en los términos del art. 210, Código Penal. Incluso con la introducción del art. 15 inc. “c” del RPT, la jurisprudencia ha sido oscilante en su aplicación para el caso donde se juzgan hechos con las características de este proceso, sin que pueda afirmarse un consenso en la subsunción de ese tipo penal a los hechos como los aquí tratados.⁹

En este marco, si bien, en cuanto a la finalidad típica de la asociación, se podría argumentar –tal como postuló la parte querellante– que la conducta de las usinas debería encuadrarse en el artículo 15 inciso “c” del Régimen Penal Tributario, y que por ende, aquella subsunción desplazaría al tipo penal previsto en el artículo 210 del Código Penal en virtud del principio de especialidad, como ya indiqué, coincido con la lectura efectuada por el MPF relativa a que el objeto de la asociación comprende maniobras que sobrepasan el espectro de los delitos contemplados en la legislación penal tributaria conforme la redacción del tipo penal tipificado por el art. 15-c de la ley 24.769, según texto actualizado de la ley 25.874. Ello en tanto, a fin de realizar el cometido de emisión de facturas apócrifas, su consecución implicó la ejecución de conductas delictivas que no necesariamente se circunscriben al régimen del derecho penal tributario.

Dentro de esta tesitura se enrola destacada doctrina que sostiene que se debe tener presente que la factura o documento equivalente, en su doble carácter de documento comercial y de comprobante fiscal, ha sido legislado y reglamentado de forma tal que por sus características intrínsecas y extrínsecas pueda testimoniar la veracidad de la operación que por ellos se documenta. Así, la confección y comercialización de facturas apócrifas afecta el bien jurídico “fe pública”, encontrándose dicha conducta abarcada por los arts. 292 y 296 del Código Penal (BORINSKY, Mariano Hernán, y otros autores, op. cit., p. 82/83).

⁹ Véase por ejemplo: causa FBB 22000088/2005/TO1 “Penente” de este Tribunal; causa N° 970/2013 “DI BIASE”, pronunciamiento del Tribunal Oral Penal Económico N°2 y el pronunciamiento de la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal; causa CPE 1409/2008/TO1 “LORO” del Tribunal Oral Penal Económico 1; entre otras.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Vale remarcar, que conforme fueran fijados los límites cognoscitivos de los hechos que este Tribunal está llamado a juzgar, las posibles conductas delictivas que la asociación ilícita pudo haber cometido, no son materia de conocimiento y juzgamiento (particular) por parte de esta judicatura, siendo que entre la imputación de membresía a una empresa criminal prevista en el 210 CP, y los delitos por ella cometidos, media entre ambas una relación de concurso real.

Así, conforme la plataforma fáctica aquí en juzgamiento, los hechos que conforman el objeto procesal por los que los imputados han sido indagados, posteriormente procesados y finalmente llevados a juicio, se circunscriben exclusivamente a la imputación de haber constituido, a través de un concierto de voluntades dotado de una intención de perdurabilidad, una asociación destinada a la comisión de delitos no especificados, sin que la imputación se extienda a los eventuales actos delictivos que tal asociación pudiera haber perpetrado. Los concretos delitos cometidos por la asociación ilícita no integran el tipo penal del art. 210 del CP, sino que concurren en forma real con aquél (Ver, al respecto: NUÑEZ, Ricardo C., Derecho penal Argentino, Córdoba, 1971, T. VI, pág. 189; SOLER, Sebastián, Derecho Penal Argentino, Buenos Aires, 1978, T. IV, pág. 608; FONTÁN BALESTRA, Carlos, Tratado de Derecho Penal, Buenos Aires, 1994, T. VI, pág. 470; y CREUS, Carlos, Derecho Penal. Parte Especial, Astrea, Buenos Aires, 1983, T. II, pág. 189).

Sentado ello, y retomando los extremos típicos que integran el art. 210, del CP, en cuanto al elemento subjetivo del tipo, la imputación a título de dolo directo (conocer y querer el fin en sí mismo) surge y puede afirmarse con ajuste a los elementos empíricos mencionados en el acápite “materialidad de los hechos y participación responsable de los imputados”. En efecto, las características de la organización, así como las conductas llevadas a cabo por cada uno de los imputados con su aporte individual, todos ellos contribuyendo al éxito de los fines de la organización, acredita plenamente el *dolo asociativo*, el cual consiste –como ya fue explicado– en el conocimiento de estar integrando un grupo formado por al menos tres





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

personas, así como el objetivo delictivo de la asociación, y la voluntad de contribuir a su accionar (ZIFFER, op. cit.). En conclusión, todos desplegaban su accionar con el cabal conocimiento de contribuir al éxito de la asociación.

Ello se encuentra robustecido –aún más– por el reconocimiento efectuado por los imputados en los acuerdos abreviados celebrados como en la oportunidad de la audiencia de visu, ocasión en la que todos confirmaron la aquiescencia libre y voluntariamente de los convenios celebrados.

Para concluir entonces, se destaca que los elementos de prueba recolectados resultan suficientes para tener por verificado –con el grado de certeza que requiere el dictado de un pronunciamiento condenatorio– el juicio de subsunción legal de los hechos a la norma y, por consiguiente, para formar convicción acerca de la culpabilidad y responsabilidad penal de los encausados, cada uno según su grado de intervención en el hecho, en la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado abarcado por el fin de protección receptado por el art. 210 del CP.

Desde esta perspectiva entiendo suficientemente fundada la calificación legal escogida por las partes en la celebración del acuerdo, con estricta observancia de los diferentes aportes individuales desplegados y, en particular, de su intensidad para la concreción del hecho global.

En efecto, a partir del plexo probatorio obrante en la causa, tal como se reseña por los acápites relativos a la “materialidad de los hechos y a la participación responsable de los imputados”, no quedan dudas del rol protagónico y superior que le ocupó a **Juan Ignacio Suris**, en su calidad de líder de la organización, puesto que era quien, conforme adelanté, se encargaba de tomar las decisiones más importantes y controlar la actuación del resto de los miembros. En concreto, Juan Suris revistió el rol de jefe de la empresa criminal. Fue el artífice de la creación y funcionamiento de las sociedades involucradas, siendo él quien diseñaba los fines y medios de la empresa delictiva, seleccionaba y reclutaba a sus integrantes y el que, en definitiva, lideraba su accionar, dándole las directivas a los demás miembros en relación a la operatoria de las usinas, desplegando libre disponibilidad y manejo de la cuenta corriente del Banco





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Provincia, sobre la cual se producía el giro financiero de las sociedades ficticias. En definitiva, Juan Suris era quien organizaba, digitaba y comanda la sociedad criminal.

En cuanto a sus consortes de causa, **Eduardo Suris** y **Nicolas Ibarra Gutiérrez**, considero razonable la apreciación realizada en punto a su participación en la empresa criminal, en carácter de meros miembros, toda vez que las constancias colectadas en la causa son demostrativas de que estos integraban la asociación ilícita, subordinándose a los designios de Juan Suris, estableciendo entidades que carecían de actividad comercial real, integrando cargos directivos, y llevando a cabo acciones dirigidas a alcanzar el objetivo final de comercializar facturas falsificadas.

Respecto de la participación de los nombrados, no empaña lo afirmado la circunstancia de que al momento de ejercer su defensa material, Juan Suris reconoció la operatoria defraudatoria, su vinculación con los demás sindicados y la función de cada uno, asumiendo para sí toda la responsabilidad y procurando desvincular a sus compañeros de fechorías (en este caso, su padre y su amigo, respectivamente), sin embargo, la estrategia defensiva ensayada en aquél momento con la finalidad de destruir la asociación ilícita reprochada ha quedado desvirtuada ante la voluminosa cantidad de elementos de cargo colectados en el presente legajo. Elementos que -ya fueron detallados más arriba- evidencian claramente el rol y la función de cada uno de los acusados, quienes, con plena conciencia e intención, participaron en acuerdo criminal, logrando vender facturación apócrifa a más de 190 clientes.

Así entonces, sobre las consideraciones expuestas corresponde validar el deslinde de las intervenciones penalmente relevantes efectuado por el Fiscal y, por consiguiente, la distinta graduación de los injustos personales asignada en las actas acuerdo.

Por lo demás, no se advierte la presencia de ninguna causal de justificación o permiso justificante con aptitud para desplazar la antijuridicidad de sus conductas. Sus capacidades de culpabilidad han sido acreditadas y se los ha visto en la audiencia del art. 431 bis del C.P.P.N., como personas desenvueltas, con capacidad de comprender la





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

criminalidad de sus actos y dirigir sus acciones (a contrario sensu del art. 34, inc. 1° del C.P.).

Tampoco se advierte que puedan haber incurrido en algún error de prohibición que cancele o disminuya sus culpabilidades, ni en alguna situación exculpan, por lo que sus capacidades de culpabilidad y consecuente posibilidad de administrarse el reproche penal no observa obstáculos, siendo ambos acusados personas plenamente capaces de derecho.

IV

Consideración aparte merece la oposición ensayada por la querella, Administración Federal de Ingresos Públicos, en el marco de la audiencia “de visu” celebrada el día 27 de octubre pasado cuando sostuvo que “*no está de acuerdo con los términos del pacto propuesto entre las partes, principalmente por no coincidir con el cambio de calificación legal que sugieren. Menciona que desde el comienzo del caso y hasta ahora, la AFIP ha sostenido que se trata de una asociación ilícita fiscal conforme al artículo 15, inciso C, de la ley 24769. Por ende, no acepta el acuerdo, ni las penas propuestas, ni las suspensiones de juicio a prueba que se están estableciendo*” (v. acta de la audiencia, fs. 5193/5200).¹⁰

Refutó esta posición el MPF añadiendo que el único dictamen que puede ser considerado como vinculante para que el Juez apruebe, o no, lo solicitado es el producido por el Ministerio Público Fiscal, dado que es él quien posee la titularidad de la acción pública y, por ende, el único capacitado para proponer este tipo de acuerdos (alternativos a la celebración del debate oral).

Así, a pesar de la existencia del querellante y de cualquier oposición que éste pueda manifestar, o aún pese a su decisión de no aceptar el monto pagado por concepto de reparación, la Fiscalía consideró que la querella no tiene autoridad -por sí- para

¹⁰ En igual sentido se manifestó en el escrito que luce a fs. 5291/5299.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

oponerse a los acuerdos de juicio abreviado, ni a las suspensiones del juicio a prueba ventiladas en estos actuados.

Ahora bien, más allá de aquellos argumentos, la discrepancia esbozada por la querrela en relación a la calificación jurídica elegida por el acusador público no impide la procedencia del juicio abreviado, conforme norma expresamente el artículo 431 bis del CPPN, y en consecuencia, no resulta óbice para la homologación del presente acuerdo entre los imputados y el Ministerio Público Fiscal.

En este orden de ideas es sabido es que si la valoración efectuada por la Fiscalía, para fundar los términos de los acuerdos arribados entre las partes alcanza a cubrir la exigencia de fundamentación -lo que ocurre en el presente caso-, no corresponde a la jurisdicción obstar la aplicación de esa solución alternativa al debate oral.

En consecuencia, y tal como he sostenido en diversas oportunidades,¹¹ excepto en aquellos casos en que los acuerdos de juicio abreviado solicitados por las partes no se encuentren debidamente fundados, o se adviertan circunstancias de importancia que justifiquen su rechazo, especialmente en relación a la necesidad de un mejor conocimiento de los hechos o a una **palmaria** discrepancia con la calificación legal admitida o respecto de la inclusión de institutos en el acta que no hacen -en sí- a las previsiones del art. 431 bis del CPPN, entiendo que corresponde aceptar lo acordado por las partes. Por los motivos explicitados a lo largo de la presente resolución, ninguna causal de excepción para apartarse de lo acordado por las partes se verifica en la especie.

¹¹ A título de ejemplo, véase causa FBB 4386/2021/TO1, caratulada “CONESA, CAROLINA BELEN Y OTROS S/ INFRACCIÓN LEY 23.737”; FBB 1205/2015/TO1, caratulada “MICHIELS, JULIO CESAR S/ INFRACCIÓN LEY 20974 (art. 33 inc. c)” y su acumulada nro. FBB 11927/2014 “MICHIELS, JULIO CESAR S/ INFRACCIÓN ART. 303 DEL CP”, causa FBB 22271/2018/TO1, caratulada “MEDINA ALCANTARA, YAKIRIS s/ FALSIFICACIÓN DE MONEDA”; entre muchas otras.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Sobre el punto, corresponde aquí traer a colación un caso sometido a la consideración de la Cámara Federal de Casación Penal, en donde la parte querellante, también la Administración Federal de Ingresos Públicos - Dirección General Impositiva (AFIP-DGI), se opuso al procedimiento de juicio abreviado, por entender que correspondía asignar otra calificación legal a los hechos (obsérvese que el Tribunal había condenado en el marco de un juicio abreviado bajo la figura de hurto mientras que la AFIP-DGI consideraba que los hechos eran constitutivos de contrabando agravado). En tal resolución -mediante la cual se rechazó el recurso de la querrela-, el voto que lideró la mayoría -con cuyos términos concuerdo- comenzó recordando que la persecución penal se encuentra en cabeza del Ministerio Público Fiscal (art. 5 del CPPN) quien es, en última instancia, quien puede disponer de ella dentro de los términos de la legalidad (art. 71 CP). Asimismo, se indicó que *“Actualmente, ello se vio reafirmado por el Código Procesal Penal Federal el cual instauró un sistema procesal con claras notas acusatorias. Este nuevo ordenamiento adjetivo debe ser tenido en consideración al momento de resolver en tanto se encuentra implementado y aplicado, plenamente, en las provincias de Salta y Jujuy y, algunas de sus disposiciones, en todo el país. Así, ese marco legal (...) sujeta el ejercicio de mi competencia en aras de la igualdad, coherencia y sistematicidad de actuación de la justicia penal. De esta forma, es el representante del Ministerio Público Fiscal el titular de la acción penal y quien podía en el caso, llegar a un acuerdo de juicio abreviado dentro del marco que prevé la ley penal”*(el destacado es propio).

En ese entendimiento, se postuló que *“modificar la sentencia recurrida en los términos que pretende la parte querellante -en función de la discrepancia con la calificación legal escogida-, sólo resulta posible en caso de que estuviera en juego el control de constitucionalidad de una norma o el orden público, suponga un caso de gravedad institucional o que la actuación del representante fiscal resulte absurda, amañada o muestre una prevaricación –obrar ilícito-”*. Y por último, se afirmó que *“más allá del acierto -o no- del acuerdo al que llegaron las partes, la recurrente no ha logrado demostrar que la postura asumida por el acusador público encuadre en*





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBF 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

alguna de las hipótesis que hubieran habilitado apartarse de lo acordado por el fiscal y la defensa y que fuera homologado por el a quo. Ello, en tanto, la querella se ha limitado a expresar su disenso con el tipo legal adoptado en autos, lo cual no alcanza para conmovir la sentencia recurrida” (causa N° FCB 5927/2014/TO1/CFC1 “Benedetto, Yago Axel s/ recurso de casación”, del 15/03/2022).

Conforme los lineamientos expuestos en el precedente reseñado, advierto que en el presente caso no se corrobora ninguna circunstancia que permita invalidar las convenciones celebradas.

A mayor abundamiento, me permito remarcar que no escapa a mi conocimiento que la calificación legal sostenida ha sido una cuestión esencial para arribar al acuerdo sometido a análisis y que, además, determinó el *quantum* de la pena.

Es más, si se siguiera a modo de hipótesis los razonamientos propuestos por la parte querellante, no sería procedente contravenir la modificación de la calificación jurídica sin afectación o menoscabo del principio acusatorio, ya que dicha modificación afectaría el núcleo central de los presupuestos pactados en los acuerdos, y aceptados por el titular de la acción penal.

Es el Ministerio Público quien representa a la sociedad agraviada por el delito y a quien -por ello- corresponde verificar la razonabilidad y el cumplimiento de los requisitos requeridos por la ley, y que “*si bien no es el único órgano garante de la legalidad, el Ministerio Público Fiscal tiene como objeto constitucional específico y puntual garantizar dicha legalidad en beneficio de la comunidad*” (cf. Ekmekdjian, Miguel Ángel, Tratado de Derecho Constitucional, Tomo V, Buenos Aires, 1999, p. 631 y ss.). En definitiva, el Ministerio Público Fiscal es quien vela por los intereses generales de la sociedad y por la observancia de la Constitución Nacional y las leyes de la República; el que representa y defiende el interés público; y el que tiene el deber de actuar con objetividad, requiriendo la aplicación justa de la ley, procurando el resguardo equilibrado de todos los valores y principios jurídicos vigentes y el ejercicio racional y ponderado del poder penal del estado.

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Es entonces al MPF, en representación de la sociedad agraviada por el delito y conforme el deber de objetividad con el que debe guiar su actuación, a quien compete establecer las estrategias adecuadas para el ejercicio de la acción penal y de utilizar las herramientas jurídicas disponibles (tal como el instituto del juicio abreviado), siendo en este contexto a quién corresponde la evaluación y determinación del límite a la respuesta punitiva del Estado.

Por consiguiente, si el fiscal y la defensa conciertan evitar afrontar un debate oral y público, mediante un acuerdo que respeta la congruencia del núcleo fáctico de la pesquisa, y le confiere un marco legal, razonable y apropiado, cualquier resolución judicial que contravenga dicho acuerdo en aras de una calificación legal más severa que la propuesta por el Fiscal de juicio, hará un uso indebido de la potestad jurisdiccional, del sistema procesal y de los fines que imperan el instituto de juicio abreviado con grave afectación del principio acusatorio y de las garantías constitucionales que concurren en salvaguarda de los imputados. Máxime, teniendo fundamentalmente en cuenta que la querellante sólo expresa su disconformidad con la calificación jurídica escogida, sin que se advierta otro motivo que podría colisionar contra los postulados contenidos en nuestra Constitución Nacional.

Por lo demás, resulta pertinente traer a colación un caso en donde la parte querellante, AFIP-DGI, interpuso recurso de casación contra la resolución del Tribunal Oral actuante que *-en concordancia con lo dictaminado por el MPF-* declaró la insubsistencia de la acción penal por violación a la garantía de ser juzgado en un plazo razonable. En tal marco, se sostuvo que *“deviene insoslayable señalar que el Ministerio Público Fiscal constituye el órgano estatal específico de persecución penal pública. Sin embargo, ‘diversas leyes particulares legitiman para intervenir como querellante en el procedimiento penal, con sus mismas facultades, deberes y responsabilidad -sin desplazar a la fiscalía-, a otros organismos estatales diferentes del ministerio público fiscal, en casos de excepción’ (Maier, Julio, op. cit. pág. 685). En efecto, los organismos estatales con legitimación para querellar representan -al igual que el Ministerio Público Fiscal- al Estado, motivo por el cual se verifica una*





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

identidad de intereses. En consecuencia, teniendo en cuenta que se advierte una analogía en cuanto a la representación invocada, **entiendo que la función de los organismos que querellan en nombre del Estado debe interpretarse en el sentido de un tercero coadyuvante del Ministerio Público Fiscal. Dicha solución permite remediar posibles conflictos ante opiniones divergentes entre los órganos del Estado en cuanto a la continuación o no de las investigaciones**” (voto de la Dra. Ledesma, CPE 990000228/2012/TO1/CFC5, caratulada “DOMÍNGUEZ, Román Julio s/recurso de casación”, 30/11/2021). Sobre este punto, interesa recordar que el Procurador General de la Nación ha señalado reparos de índole constitucional cuando la parte querellante a cargo de un órgano del Estado pretenda continuar con la prosecución de la acción cuando el fiscal del caso tuviera un criterio contrario. Puntualmente, ha expresado que “...en este supuesto en el que el funcionario dependiente del Poder Ejecutivo demandare para sí la titularidad directa y exclusiva de la acción penal pública reservada a los fiscales investidos por la Constitución y las leyes (artículo 120; ley 23984), habría sí, una intromisión de ese poder en la misión propia y específica del Ministerio Público de la Nación” (del dictamen del Procurador General en la causa G. 1471.XL “Gostanián, Armando s/ recurso extraordinario”, al que remitió la Corte Suprema de Justicia de la Nación con fecha 30 de mayo de 2006).

Conforme los términos expuestos, y en el marco de las particularidades que se suscitan en la presente, considero aquí aplicable, mutatis mutandi, tales afirmaciones, y en consecuencia, tengo para mí que rechazar el acuerdo en atención a las pretensiones de la querella de una diferente calificación legal, constituiría un obrar indebido de la judicatura, fundamentado en un exceso de actuación de la AFIP.

Por otro lado, también tengo en consideración que el juicio abreviado, como procedimiento consensuado por el cual se establece un acuerdo sobre la interpretación jurídica de los hechos y la sanción correspondiente, constituye una herramienta eficaz para el Ministerio Público Fiscal. En el caso de marras, dicho mecanismo ha logrado satisfacer sus objetivos primordiales, destacándose la eficiente optimización de los recursos públicos. En el presente proceso, la solución alcanzada a través del





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

acogimiento al procedimiento previsto en el art. 431 bis del CPPN, honra la finalidad para la que fue creado el instituto, facilitando la agilización procesal y descongestión del sistema judicial. Este resultado es manifiesto en tanto, con la suscripción del presente acuerdo de juicio abreviado -y su consecuente sometimiento a condena- se agiliza el servicio de justicia y se evita la realización de un debate oral y público que hubiera insumido una gran cantidad de recursos humanos y económicos con la producción de más de 300 testigos, en múltiples sesiones de audiencias prolongadas que podrían extenderse holgada y estérilmente por los distintos carriles procesales que ya ha transitado este proceso.

En este acto, no solo tengo en consideración que la homologación de los acuerdos se erige como una adecuada respuesta, que acelera la reconstrucción social corrompida por los hechos aquí en juzgamiento, conciliando el interés de la sociedad (representada por el MPF) en castigar el delito; con el interés individual de los imputados en obtener una pronta respuesta estatal en ser juzgados en un plazo razonable; sino también contemplo que, según el propio consenso de las partes, se da preeminencia a los principios de acción y de defensa.

Asimismo, amén de considerar que los términos de los acuerdos superan con éxito el test de legalidad y razonabilidad -conforme lo expresado en los acápites previos-, valoro además la pertinencia y utilidad de estas convenciones para poner un punto final a una prolongada pesquisa cuya tramitación se remonta al año 2011.

No puede escapar a mi conocimiento que los imputados han sido convocados a prestar indagatoria hace ya más de una década (noviembre de 2013) y procesados el 25 de marzo de 2014.

Desde entonces, ha pesado sobre todos ellos cargas procesales, entre las cuales se incluye la comparecencia en comisaría el primer día hábil de cada mes. Además, se han aplicado medidas cautelares patrimoniales, consistentes en la inhibición general de bienes y el embargo preventivo en los términos del artículo 512 del Código Procesal Penal de la Nación. El monto de dicho embargo ha sido actualizado por este Tribunal, fijándose en la suma de \$ 26.000.000 para todos los imputados, con la excepción de





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Juan Suris, a quien se le ha impuesto un monto de \$100.000.000. Adicionalmente, como medida restrictiva, pesa sobre ellos la prohibición de salida del país, sin olvidar que Juan Suris estuvo bajo prisión preventiva por más de tres años y seis meses.

Sin entrar a juzgar sobre las causas que pudieron haber conspirado contra un desenvolvimiento más célere y dinámico, tampoco puedo obviar la cuantiosa cantidad de jueces -entre titulares y subrogantes- que han tenido a su cargo esta causa sin que la misma haya podido alcanzar su punto final hasta hoy.

Obsérvese que únicamente desde que la misma ha sido elevada a este Tribunal, en el año 2016, ha contado con más de una decena de intervinientes.¹² Así entonces, me permito remarcar que, dadas las particularidades de esta causa, y habiendo sido llamado a conocer sobre el mérito de este proceso y teniendo la potestad de poner término a este asunto, destaco que la convalidación del juicio abreviado representa una herramienta jurídica de gran utilidad, no solo por su eficiencia procesal sino también por su capacidad de proporcionar una solución final a esta causa.

Este mecanismo permite agilizar un cierre adecuado de este proceso, fijando la responsabilidad penal de los involucrados y su correspondiente respuesta punitiva, al mismo tiempo que se garantiza el respeto por el principio acusatorio. En este contexto, la aplicación del juicio abreviado se muestra no solo como una opción viable, sino como la más conveniente para la conclusión efectiva de este caso.

Por otro lado, también tengo en consideración que la solución alcanzada por las partes, no solo contempla la imposición de una sanción penal adecuada, sino que enfatiza la reparación del daño ocasionado al erario público por las conductas cometidas a través de la asociación ilícita, con estricta observancia a la conservación y mantenimiento de sus arcas. Esto último reviste especial relevancia, sobre todo si se

¹² El conocimiento de esta causa, que inicialmente contaba con la integración de los jueces Dres. Juan Leopoldo Velázquez, Raúl H. Fernández Orozco y Beatriz Elena Torterola, experimentó cambios sucesivos, incorporando a los jueces Dres. Salas Luis Roberto, Oscar Admundo Albrieu, Marcos Javier Aguerrido, Pablo Esteban Larriera, Díaz Lacava, Leandro Sergio Picado, y tras la intervención del titular de la sede y la excusación del Dr. Foglia, quedó finalmente conformado el 09/08/2021 por los jueces Dres. Aguerrido, Bracco y quien suscribe.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

tiene en cuenta que el tipo penal por el cual AFIP intenta subsumir la conducta de los imputados (art. 15 inc. c, RPT), tiene como fin de protección la hacienda pública, es decir la intangibilidad de la recaudación fiscal.

Asimismo, es importante subrayar que todos estos acuerdos han sido debidamente detallados y ratificados en las actas correspondientes, las cuales han sido firmadas por todos los imputados y el Ministerio Público Fiscal. Este consenso refleja un ejercicio de responsabilidad y colaboración por parte de los involucrados, asegurando que las medidas adoptadas estén en consonancia con los intereses de la justicia.

Por último, y atendiendo a las particulares circunstancias de la causa, considero que en este caso concreto, un eventual rechazo del acuerdo –para la consiguiente realización de un debate oral–, fundado en posibles diferentes apreciaciones jurídicas respecto de juicios de tipicidad –calificación legal del hecho– únicamente determinará que se difiera la solución final del proceso sin beneficio alguno para el justiciable ni para la sociedad, en detrimento de la pronta conclusión de la causa que, en los términos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, es un derecho que cabe subsumir dentro del derecho de defensa en juicio consagrado por el art. 18 de la Constitución Nacional.

Todo ello, sin desmedro de reafirmar lo mencionado en los párrafos inaugurales del presente acápite que, por imperio de nuestro código adjetivo, la opinión de la parte querellante en el marco del juicio abreviado, no resulta vinculante para el juez (art. 431 bis, apartado 3, CPPN).

TERCERA CUESTIÓN: Individualización de la pena a imponer (arts. 40 y 41 del Código Penal):

Para fijar el **quantum** de la pena respecto de los imputados, en forma general, pondero las pautas objetivas y subjetivas de valoración contenidas en los arts. 40 y 41 del CP y la limitación impuesta por el inciso 5° del art. 431 bis del CPPN.

El monto, en principio, establecido en el acuerdo de juicio abreviado, en modo alguno exime al Tribunal encargado de dictar la condenación, de analizar la medida de





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

reproche que corresponde para el hecho que engloba la sanción que se está dictando (conf. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, Sala I, causa CCC 56521/2017/TO1/CNC1 “E., D. E. s/recurso de casación”, del 24/9/2020).

La argumentación en torno a ello tiene el cometido de otorgar racionalidad al momento de seleccionar la calidad y cantidad de dolor que el Estado va a infligir sobre una persona. La racionalidad de los actos de gobierno es una exigencia republicana derivada del art. 1 de la Constitución Nacional y, para que se pueda predicar el carácter racional respecto de un acto, éste debe ser explícito y controlable en sus argumentos. La determinación de la pena significa la fijación de parámetros dentro de los cuales operará la reacción penal y abarca la labor judicial de la determinación de la clase de pena, su cuantía dentro de los límites legales y de las formas de imposición o cumplimiento. Como tal, es tan importante como la determinación de los hechos y la autoría.

En la dogmática penal se considera que el delito es el injusto – conducta típica y antijurídica– culpable –reprochabilidad de aquel injusto–. Ambos conceptos son graduables, lo cual nos permite concluir que la pena estará determinada por la magnitud del injusto y por el grado de reprochabilidad. El primero se refiere a la mayor o menor afectación del objeto de bien jurídico, en tanto que el segundo hace referencia a la amplitud o estrechez del ámbito de autodeterminación con el que contaba el autor.

Es en este sentido que deben ser interpretadas las pautas o criterios que enuncia el art. 41 del Código Penal al momento de fijar la condena. Así, cuando dicha norma hace referencia a la *"naturaleza de la acción y de los medios empleados para ejecutarla y la extensión del daño y peligro causados"*, está fijando criterios para la graduación del injusto penal. De la misma manera que cuando se refiere a la *"...edad, educación, las costumbre y la conducta precedente del sujeto, la calidad de los motivos que determinaron a delinquir, especialmente la miseria o la dificultad de ganarse el sustento propio necesario y el de los suyos..."*, está indicando las pautas para la graduación de la reprochabilidad.

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Juan Ignacio Suris

En la determinación de la pena a imponer, valoro como factores **atenuantes** que inciden en su mensuración:

La conducta evidenciada por el encartado con posterioridad a la comisión delictiva, habiendo estado a derecho siempre que fue requerido por la autoridad judicial; asimismo, su actitud colaborativa con la justicia, pues no se verifican conductas obstructoras ni dilatorias del proceso, y el acusado ha facilitado la investigación y la dilucidación de la verdad, reconociendo su propia responsabilidad desde los albores de la instrucción al ejercer su acto material de defensa e incluso en sede administrativa.¹³

Valoro, además, que ha demostrado un compromiso constante con las obligaciones procesales, cumpliendo con las reglas de conducta impuestas luego de su liberación en el mes septiembre de 2017, presentándose ante el Tribunal el primer y tercer martes de cada mes con la periodicidad requerida desde su aquel entonces. No puede pasarse por alto que el imputado ha cumplido prisión preventiva más de tres años y seis meses, en relación con un delito cuya pretensión punitiva cuenta con una escala mínima de 3 años para el tipo básico; y que luego de efectuarse su excarcelación, ha observado rigurosamente las condiciones que le fueran exigidas, compareciendo ante el Tribunal cada quince días durante seis años.

Relacionado con ello, y con similar alcance, tengo en consideración el tiempo transcurrido desde el inicio de esta pesquisa, en el año 2011, lapso que no se puede escindir de consecuencias emocionales y psicológicas significativas para Juan Suris.

En este punto -por expreso pedido del imputado- se debe traer a colación lo manifestado por él durante la audiencia de visu tanto en esta causa, como en aquella en que condené al imputado, FBB 12000124/2012/TO1, en la cual él expresó: “**reconozco quizás algunas cosas que estuvieron por fuera de ley, agradezco a Dios que me dio la conciencia para comprender esto, lo que sí pido que al momento correspondiente**

¹³ Véase fs. 30 del Cuerpo de Fiscalización N° 1 O.I N° 616.127.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

*se me contemple todo el tiempo que estuve en prisión, todo el tiempo que sufrí el proceso penal, el sufrimiento que ocasioné a mi familia, lo que estoy consciente; quiero hacerme cargo de cualquier perjuicio que pudiera haberse ocasionado, estoy absolutamente arrepentido y quiero resarcirlo. Quiero pedir disculpas públicamente, Le doy gracias a Dios que me dio la posibilidad de rehacer mi vida y amo a mi familia y quiero dejar el ejemplo a ellos. Así que quiero agradecer al tribunal, al fiscal, y a mis asistidos por su actuación **honorable en este momento**".*

En el marco de aquella causa, en la sentencia condenatoria contra el nombrado dictada con fecha 3/11/23,¹⁴ señalé que su arrepentimiento público, propio de quien reflexiona acerca de su hecho, debe traducirse en una atenuación de su injusto y, consiguientemente, de su punibilidad.

Valoro además el buen concepto informado (informe socioambiental de f. 5197); y la carga que ha representado estar sometido a proceso durante más de 10 años (repárese que en noviembre del 2013 fue la citación indagatoria) y el desgaste mental y emocional que ello implica, y que ha sido claramente expresado en ambas audiencias de visu.

La intención de Suris de avanzar en su vida, enfrentando y resarciendo las consecuencias de sus acciones pasadas, es un indicativo de su evolución personal. En el marco de la audiencia, aseguró haber experimentado un cambio significativo a lo largo del tiempo, reconociendo y aprendiendo de sus errores pasados. Es un aspecto

¹⁴ Ver sentencia dictada en los autos FBB 12000124/2012/TO1, caratulada: "SURIS, JUAN IGNACIO Y OTRO s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C)" concretamente a fojas 7138/7183, en particular el Fallo en su punto 2., donde se lee "**CONDENAR a Juan Ignacio Suris, cuyas demás condiciones personales son de figuración en autos, por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización agravado por la intervención organizada de tres o más personas** (arts. 5 inc. c y 11 inc. c de la ley 23.737 y 45 del CP) **respecto al hecho cometido desde –al menos– el año 2011 y hasta el 14 de diciembre del año 2013 en la ciudad de Bahía Blanca y en la zona, a la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN, MULTA de \$25.000, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS DEL JUICIO** (cfr. arts. 5 inc c. y 11 inc. "c" de la ley 23.737, en su redacción anterior a la ley 27.302, arts. 5, 12, 29, 40, 41 y 45 del CP y art 530 del CPPN)".





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

positivo, que se debe sopesar, el consentimiento dado por Juan Suris -junto con los restantes consortes- para la reparación integral del daño causado por la empresa criminal por él liderada.

El hecho de haberse sometido libre y voluntariamente a la compensación completa del perjuicio fiscal ocasionado al Estado (ascendiendo a la suma de 85,000,000 de pesos) refleja su arrepentimiento y su firme intención de reparar el daño causado con su accionar.

Por otra parte tengo que computar como **agravantes** la extensión de la conducta del imputado, su calidad de líder de la operatoria, pues era quien decidía los extremos más importantes de la organización criminal; la reiteración en el tiempo de su accionar, los beneficios obtenidos y de los daños producidos al erario público.

Ahora bien, teniendo en cuenta el acotado margen que establece el art. 431 bis del CPPN –que impide superar el monto de la pena convenido por las partes– las referencias indicadas acerca de las particulares características de la conducta del encartado, a la luz del principio de proporcionalidad y culpabilidad, justifican convalidar mensuración de pena acordada por las partes, y por lo tanto corresponde imponer a Juan Ignacio Suris **la pena de CINCO AÑOS DE PRISIÓN**, accesorias legales y costas, conforme a los arts. 5, 12, 29, 40, 41, 45 y 210 (primera y segunda oración) del Código Penal y art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación.

Sobre la Unificación de la Pena

I

En la oportunidad de exponer los acuerdos arribados, las partes informaron que tal como se lo detalló en el marco del acuerdo celebrado con Juan Ignacio Suris en la causa FBB 12000124/2012/TO1 [“Principal en Tribunal Oral TO01– Imputado: Suris Juan Ignacio y Otros s/Infracción Ley 23.737 (art. 5 inc. c)”], “*atento a que se están*





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

juzgando en forma separada varios hechos (la mencionada FBB 12000124/2012/TO1 y la presente FBB 012000018/2011/TO01 (...), ambas del registro del mismo Tribunal), y que los mismos deberán respetar las reglas concursales, y conforme Juan Ignacio Suris estuvo detenido en el marco de ambas causas, por diferentes periodos de tiempo, las partes consideran como parte del acuerdo que la eventual pena y detención se ejecute una vez firme la pena única composicional y su cómputo, ello sin perjuicio de la eventual vista o presentaciones oficiosas de las partes para pronunciarse en relación a la pena única”.

Tal como se reseñó, en el marco de tal causa, el día 3/10/2023, condené a Juan Ignacio Suris por considerarlo coautor penalmente responsable del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de comercialización agravado por la intervención organizada de tres o más personas (arts. 5 inc. c y 11 inc. c de la ley 23.737 y 45 del CP) a la pena de SEIS AÑOS DE PRISIÓN, MULTA de \$25.000, ACCESORIAS LEGALES Y COSTAS DEL JUICIO (cfr. arts. 5 inc c. y 11 inc. "c" de la ley 23.737, en su redacción anterior a la ley 27.302, arts. 5, 12, 29, 40, 41 y 45 del CP y art 530 del CPPN).

II

Por otro lado, durante la audiencia de visu de la presente causa, las partes manifestaron su postura y expusieron sus argumentos en torno a la unificación de la pena en ambas causas.

En primer lugar, el representante del MPF manifestó su pedido de pena única de **9 años de prisión**. A continuación se transcribe lo esbozado por el acusador al fundar su petición, conforme surge del acta de fs. 5193/5200.

El MPF “*Resalta la antigüedad de los hechos y los retrasos en el proceso judicial. Menciona que el juicio inicial [en referencia a la causa FBB 12000124/2012/TO1] fue anulado y ha habido demoras en establecer un nuevo tribunal, indicando que ‘nadie quiso agarrar este Fierro caliente hasta que llegaron*





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

ustedes'. Hace referencia al tiempo que el señor Suris ha estado detenido, más de 3 años, y la incertidumbre que ha enfrentado debido a la falta de resolución del caso. Aborda la gravedad de los delitos, indicando que la asociación ilícita fiscal no solo se centró en la emisión de facturas apócrifas, sino que también tenía como objetivo otras actividades ilícitas como el uso de documentos falsos. Menciona que la asociación ilícita fiscal tuvo vínculos con otras empresas y figuras conocidas tanto a nivel local como nacional. En cuanto a la causa de drogas, el fiscal destaca que el acusado fue líder de la operación del comercio de sustancias y que, por la reiteración en el tiempo de la conducta, hubo una mayor afectación al bien jurídico de salud pública. Menciona que aunque los hechos son graves, el fiscal ha decidido no superar las penas mínimas legales en cada causa. Sin embargo, las considera al ponderar una pena única. En base a ello, propone una pena total de 9 años, reduciendo 2 años de la suma original de 11 años. Justifica esta reducción mencionando la situación personal del señor Suris, su detención previa, y su comportamiento durante el proceso".

Por su parte, la defensa particular del imputado petitionó la unificación en un monto total de **6 años de prisión**. En la audiencia señalada, remarcó: "*que en el contexto de los acuerdos de juicio abreviado, su defendido ha aceptado ciertas condiciones en todos los procesos judiciales en los que está involucrado. Lo crucial aquí es que esas condiciones comiencen a aplicarse cuando la "pena única" sea firme y se realice el cómputo correspondiente. Resalta la importancia de este acuerdo, mencionando que ya ha sido establecido en otros dos acuerdos previamente firmados (...) enfatiza que fue una condición que ellos claramente establecieron y que el fiscal ha consentido. Además, hace referencia a la "solución jurídica del caso" como algo lógico y razonable, basándose en lo dispuesto por el Código Penal desde el artículo 55. También destaca que los diferentes hechos juzgados, aunque estén en diferentes causas, deben ser considerados de manera unificada, según el artículo 58 del Código Penal. La defensa argumenta sobre la aplicación del artículo 58 del Código Penal, que instruye a los operadores de Justicia a aplicar las reglas del concurso en los casos de unificaciones de pena. Una vez aclarado esto, se indica que el juez deberá*





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBF 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

determinar, posteriormente, una nueva escala penal. Primero, deberá establecer cuál es esta escala penal y, luego, deberá fijar la pena basándose en ella. Según la defensa, esta escala penal estará conformada por el delito que tenga la pena mínima más alta, ya que se ha pactado entre las partes que se trata de un concurso real. Por lo tanto, la pena mínima será la del delito más grave. Dado que hay dos sentencias en este caso, la que tiene la pena máxima se establecerá como el mínimo de la escala penal. Por otro lado, el máximo será la pena solicitada por el fiscal, quien está de acuerdo en aplicar el método mencionado. Partiendo de esta base, la defensa sostiene que el juez deberá elegir, dentro de esta escala, la pena que corresponda al caso, tomando en cuenta los principios de culpabilidad y proporcionalidad. Una vez determinado esto, la defensa considera que la pena tendrá un mínimo de 6 años y un máximo de 9 años. También menciona que ponderarán ciertos aspectos y solicitarán, sin perjuicio de que podrían argumentar a favor de la doctrina de la perforación del mínimo legal de la especie por razones que expondrán posteriormente. E indica que siempre ha priorizado el principio de buena fe procesal y el principio pro homine. La defensa solicita que se valore la actitud posterior al delito de su representado. Consideran que es valioso reconocer la valentía de Suris, a pesar de enfrentar el riesgo de volver a prisión y habiendo estado casi 4 años encarcelado, asumir la responsabilidad del hecho. Destacan la valentía de hacerlo teniendo en cuenta las posibles consecuencias en un juicio y todo lo que esto implica. Menciona que a nivel procesal, los abogados podrían haber adoptado diferentes estrategias para prolongar el proceso. Sin embargo, destaca que Suris desea resolver la situación porque necesita rehacer su vida y cerrar este capítulo. La defensa solicita que se reconozca el valor de la decisión en función de la armonía y la paz social que este caso requiere y para una resolución más rápida. Resaltan que de haberse continuado, habría involucrado a más de 300 testigos en una causa y otro caso de tamaño similar, lo que representaría un desgaste significativo para el sistema judicial y un costo para el erario público, en términos de los recursos necesarios. La decisión de su asistido de asumir esta responsabilidad es vista como algo positivo y, la defensa enfatiza que él ha aceptado

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

responsabilidades más allá de lo que inicialmente quería discutir. La defensa sostiene que, al determinar el mínimo de la escala penal en la pena única, es esencial considerar que no hay razón para desviarse del mínimo legal establecido. Argumentan que la pena resultante de la unificación debe ser proporcional a los hechos. Si en un caso se aplica el mínimo legal y en otro también, no ven motivo para alterar esa decisión en la escala penal final. Consideran que no existen razones para hacerlo y que hay factores atenuantes que respaldan su posición. Enfatizan que si se decide aplicar una pena diferente al mínimo legal en uno de los hechos, todavía carecería de justificación. Como evidencia, mencionan el aspecto de la reparación del daño. Refieren al artículo 59 inciso 6 del Código Penal, que permite la reducción de la pena en delitos patrimoniales si hay una compensación completa del daño. La defensa destaca que han acordado compensar el daño integral establecido por la AFIP en 80,000,000 de pesos, que con la tasa máxima aumenta a 85,000,000 de pesos. Por lo tanto, argumentan que no queda daño alguno para el Estado. Concluyen que, dado que el daño ha sido completamente reparado, no hay justificación para una pena que exceda el mínimo de 6 años establecido por el caso de narcotráfico, especialmente considerando que el objetivo de su representado es reparar completamente el daño, eliminando cualquier razón para una pena más severa. Por otra parte, la defensa argumenta que el proceso ha excedido el tiempo estipulado por el legislador, señalando que cuando se sanciona una norma, se contempla el tiempo que durará el proceso penal. En este caso, se menciona que el proceso se ha extendido por casi 15 años, lo cual consideran excesivo. Hacen referencia a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Justicia, mencionando el fallo Genie Lacayo vs. Nicaragua, en el cual se establecen parámetros para determinar la violación del plazo razonable. Indica que según este fallo, un proceso que dura más de 2 años para llegar a una sentencia firme y definitiva excede el límite, y más de 5 años en total es inadmisibles. Dada esta situación, afirman que se está violando el plazo razonable. Citan a juristas como Pastor y Roxin, quienes sostienen que la demora en el proceso, siendo responsabilidad del Estado, debería ser considerada como una circunstancia





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

atenuante al momento de dictar la sentencia. Por ello, sugieren que podrían solicitar la perforación del mínimo de declarar la inconstitucionalidad de la escala penal artículo 58, y se establezca una nueva escala de 4 a 6 años. Sin embargo, aclaran que su petición es que se considere este exceso de tiempo como un atenuante y se aplique el mínimo legal en la sentencia. La defensa presenta una propuesta sobre cómo medir la pena cualificada, sugiriendo que se determine el grado de compensación. Proponen aplicar una pena de 6 años y descontar 2 años de la misma como compensación. Mencionan que existen otras soluciones, como el impedimento procesal, pero aclaran que no están solicitando eso. Subrayan que si la extensión del proceso se vuelve intolerable, se debería considerar un sobreseimiento debido a la violación del plazo razonable. La defensa concluye destacando dos puntos principales: la reparación integral y la violación del plazo razonable. Destaca que históricamente, el sistema legal no siempre ha utilizado la pena de prisión para sancionar ciertos delitos, en particular aquellos de naturaleza económica. Refieren a las leyes mosaicas como las primeras leyes de la humanidad, donde delitos como el hurto no eran castigados con prisión. La pena de prisión surgió posteriormente como una alternativa a la pena de muerte. Argumentan que no todos los delitos deben solucionarse con pena de prisión, citando el Código Penal en el artículo 59, inciso 6. En el caso particular que presentan, se trata de un delito económico sin violencia. Por lo tanto, consideran que se puede compensar de manera efectiva sin recurrir a una pena de prisión agravante. Concluyen solicitando que se aplique la pena mínima legal de 6 años de prisión.”

Ahora bien, nuestro Código Penal, por el principio de unidad o de pena total no admite la posibilidad de subsistencia de más de una pena pendiente de cumplimiento respecto de una misma persona, de tal modo que frente a la imposibilidad material de juzgamiento simultáneo de hechos concurrentes el art. 58 del CP impone, de oficio, al último juez unificar en la última sentencia de condena (cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl y De Langhe, Marcela, *Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial*, T. 2, 3era. edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2019, 701 y sus citas)

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

A tal efecto debe advertirse que para el texto vigente (art. 58 del CP) “no interesa que el hecho distinto objeto del último juzgamiento sea anterior o posterior a la condena anterior que impuso la pena pendiente de cumplimiento. Debe tratarse simplemente de ‘otro hecho distinto’” (cfr. Zaffaroni, Eugenio Raúl y De Langhe, Marcela, *Código Penal y normas complementarias. Análisis doctrinal y jurisprudencial*, T. 2, 3era. edición, Hammurabi, Buenos Aires, 2019, 699 y sus citas).

Creus aclara que “la competencia unificadora del tribunal que dicta la última pena se ejerce, aunque la condena que se haya impuesto no sea la mayor” (cfr. Creus, Carlos, *Cuestiones penales*, Ed. Rubinzal Culzoni, Santa Fe, 1982, 135 citado en nota al pie 355 por D’ALESSIO, Andrés J. , *Código Penal de la Nación. Comentado y anotado*, T. 1, 2da. Edición actualizada y ampliada, La Ley, Buenos Aires, 2009, 921 y sus citas).

Tal como señalé recientemente en la causa FBB 22271/2018/TO1, caratulada “MEDINA ALCANTARA, YAKIRIS s/ FALSIFICACIÓN DE MONEDA”, el Código Penal trae dos hipótesis de unificación, una el caso de unificación de sentencias, cuando las penas han sido dictadas en clara violación a las reglas de los concursos de delitos (unificación de condenas) y por otro lado, lo que ocurre cuando las penas han sido impuestas por nuevos delitos, sin afectación a las reglas aludidas, esto es, cuando se cometió el segundo ilícito poseyendo ya calidad de condenado en el primero (unificación de penas).

El caso de autos es de los primeros, por lo que se deben unificar las sentencias o condenas por el Tribunal que dispuso la pena mayor, imponiendo una única pena sobre la base de las escalas de los delitos por los que se condenara al imputado, ello de acuerdo a las normas del concurso (sobre la unificación de condenas v. D Alessio, José A. -dir-; Divito, Mauro A. -coord.-, *Código Penal de la Nación, comentado y anotado*, T.I, 2da edición, Ed. La Ley, Buenos Aires, 2011, pp. 920 y ss.). En este caso entonces corresponde dictar una única condena respecto del causante, toda vez que, cuando cometió el hecho juzgado en este Tribunal Oral, aún no había recaído sentencia por el primero de los hechos cometidos.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Como sostiene la doctrina, al unificarse las condenas no se alteran las declaraciones de hechos contenidas en los respectivos pronunciamientos ni la calificación legal, pero si desaparece la condenación, la forma en que fue impuesta y la modalidad con que se ejecutaba la pena. Se dijo: “...*Consiguientemente, corresponde que cese la condenación condicional y también la libertad condicional, sin perjuicio de que puedan imponerse o concederse nuevamente, siempre que lo permita la condenación única. En ninguno de estos casos opera una verdadera revocación de las condicionales, sino que éstas cesan por aniquilamiento de la condenación misma. El juez que las hace cesar no puede ser otro que el que unifica la condenación, puesto que su cesación no es más que su efecto necesario....*” (Zaffaroni, Alagia y Slokar, Derecho Penal Parte General, 2o edición, Buenos Aires, Ediar 2002, p. 1020).

Así, desaparecidas ambas condenaciones, corresponde imponer una nueva pena total -con criterio propio- mediante las reglas del concurso de delitos, que debe realizarse mediante el método compositivo y no el aritmético porque es el “...es el más respetuoso de nuestra Carta Magna y las normas procesales respectivas...” (conf. Sala III, causa n° 12812 “Mansilla, Máximo Ezequiel s/recurso de casación”, rta. 10/12/10) y el “... más adecuado a los principios de orden constitucional y procesal que rigen la materia... pues permite conocer los parámetros individualizadores tenidos en consideración por el sentenciante de acuerdo con lo establecido por los arts. 40 y 41 CP, de manera tal que permita la posibilidad de controlar los motivos que inspiraron el decisorio....” (conf. Sala II, causa n° 13178 “Mohay, Juan Manuel s/recurso de casación”, rta. 16/08/12). Cabe tener presente que el ideal de pena única de vería desnaturalizada si la justicia aplicase métodos de elaboración de pena sin más fundamento que ecuaciones aritméticas (v. Lazzaneo, Juan Ignacio, “La teoría de la pena total y el tratamiento penal unitario. La determinación judicial de la pena en la integración de sentencias”, en DPyC 2021 agosto, p.193, cit. online TR LALEY AR/DOC/1818/2021, con especial referencia al voto de la Dra. Ángela Ledesma en autos “Reina, Carlos R.”, CFCEP, Sala III, del 14/02/2007). En este sentido, rigen también las exigencias de motivación de los arts. 399 y 404, inc. 2°, Cód. Proc. Penal,

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

FBB 12000018/2011/TO1

del mismo modo en que rige para cualquier sentencia de condena (conf. voto del Dr. Sarraibayrouse en Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala II, "L. O., C. A. s/ recurso de casación" del 31/03/2021 en TR LALEY AR/JUR/7588/2021).

Además, es oportuno mencionar que es doctrina del más alto Tribunal que: "[L]a fijación de la pena única dentro del límite establecido por la suma de ambas condenas es facultad discrecional de los jueces de la causa..." (Fallos: 308:2547).

En este marco, corresponde efectuar el estudio sobre la hipótesis de que se hubiera realizado un único debate por todos los acontecimientos, y no limitarnos a la mera suma aritmética de las sanciones penales aplicadas en las diversas causas (conf. Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional, Sala III, c. 9112/2008 "Ruiz", del 13/11/201).

Luego de haber delimitado el marco de análisis jurídico- dogmático sobre el que se basará el rol de ejercer justicia al caso concreto, para graduar la pena única a imponer tomo en consideración las pautas establecidas en los artículos 40, 41, 55, 57 y 58 del Código Penal, la calificaciones legales de ambas condenas, las condiciones personales de Juan Suris y tendré presente, principalmente, la naturaleza de los hechos que se le atribuyeron; sus modalidades, consecuencias y el grado de culpabilidad en los mismos.

Así, en ambas condenas valoré como **agravantes** la extensión de la conducta del imputado, que las conductas fueron encuadradas en delitos dolosos, el rol protagónico que asumió el condenado en cada uno de los hechos, es decir, su calidad de líder de la operatoria y por no haber existido ningún eximente de responsabilidad.

Por otro lado, en ambas condenas también tuve en cuenta como **atenuantes**, el buen concepto informado, la conducta evidenciada por el encartado con posterioridad a la comisión delictiva, habiendo estado a derecho - luego de su liberación en el mes septiembre de 2017- siempre que fue requerido por la autoridad judicial sin verificar conductas obstructoras ni dilatorias del proceso.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

También aprecié en ambas causas que la situación expresamente asumida por el autor y su arrepentimiento público, propio de quien reflexiona acerca de su hecho, debe traducirse en una atenuación de su injusto y, consiguientemente, de su punibilidad. En igual sentido, la intención de reparar integralmente el daño causado por la empresa criminal, en el marco de esta causa.

Asimismo, al momento de fijar la pena, cabe mencionar como indicadores relevantes, el paso del tiempo entre los hechos objeto ambas causas y la sentencias que pudieran dictarse como consecuencia de ambos acuerdos (en la presente causa, han transcurrido casi 20 años desde el tiempo de su inicio de funcionamiento de la organización, y 10 años desde su cese; mientras que en la causa FBB 12000124/2012/TO, los hechos por los que fuera condenado Suris transcurrieron entre 2011 y 2014, es decir, el imputado cesó su conducta delictiva en ambos procesos hace más de una década), tiempo durante el cual Juan Suris ha reconstruido su trayectoria vital en libertad (desde que se dispusiera el cese de su prisión preventiva), manteniendo la fidelidad al derecho, y no registrando antecedentes penales computable en los lapsos posteriores a tales hechos.

En consecuencia, habiendo escuchado los argumentos de las partes, entiendo justo se unifiquen las condenas impuestas por composición, y fijar la pena única de **8 años de prisión de cumplimiento efectivo**, comprensiva de la pena impuesta en esta causa y la dictada el pasado día 3 de noviembre de 2023 en el marco de la causa FBB 12000124/2012/TO1, caratulada: “SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C)”

Eduardo Suris

En orden a la mensuración de la pena respecto a **Eduardo SURIS** contabilizo como **atenuante** la falta de antecedentes penales computables del imputado (conf. informes de fs. X 5195), el hecho de que, pese a que transcurrió el proceso en libertad permaneció a derecho y cumplió con las cargas procesales que le fueron impuestas, y el compromiso de la reparación del daño acordada en la presente acta. Asimismo, y tal

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

como postuló el MPF (ver supra I.1), estas mismas circunstancias (en especial su carencia de antecedentes condenatorios y el compromiso de reparación del daño), así como su avanzada edad, son ponderadas al momento de considerar que la pena de prisión debe ser dejada en suspenso, ya que demuestran la inconveniencia de aplicar efectivamente la pena privativa de libertad en este caso. Por otra parte, pondero **como agravante** la extensión de la conducta descripta y su reiteración en el tiempo.

A fs. 5224, la defensa técnica Eduardo Suris informó que debido a diversos padecimientos de salud (artrosis generalizada, antecedentes de carcinoma prostático operado, traumatismo de uretra y micción hipospádica, entre otras), el nombrado se vio obligado a trasladarse al domicilio de calle Agustín Álvarez nro. 1228 de este medio, junto a su hijo Guillermo Suris y la novia de éste, quienes lo asistirán dados los problemas de salud que sufre, y la avanzada edad que posee (77 años). Además, el domicilio informado primigeniamente, esto es, el sito en calle Ciudad de Cali 4080 se encuentra muy lejano a centro de salud asistencial alguno ante una eventual atención médica que Eduardo Suris requiera con carácter de urgente.

Así, entonces, en relación a Eduardo Suris, y dada la graduación del injusto personal atribuido por el Fiscal quien postuló la imposición de una pena de ejecución condicional precisando en la audiencia realizada el 27/09/2023 que, en los términos del art. 27 bis del CP, que la condicionalidad de la pena se sujeta a las reglas de conducta a las descriptas en el acápite **I.1**, supra -a donde se remite a fin de evitar reiteraciones innecesarias-. Tales reglas fueron consensuadas con el imputado y la defensa quienes en la oportunidad de la audiencia de visu ratificaron su aceptación.

Con ese alcance, considero que las razones invocadas por el Sr. Fiscal lucen razonables y se ajustan a las exigencias de legalidad requeridas por el instituto en cuestión, por lo que convalidaré la modalidad en suspenso de la pena de prisión sujetando Eduardo Suris, de acuerdo con lo previsto por el art. 27 bis del Código Penal (art. 27 bis inc. 1, 7 y 8 del CP).

Nicolas Ibarra Gutierrez

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Por último, en relación a **Nicolas Ibarra Gutierrez** aprecio como **atenuante** la falta de antecedentes penales del imputado (conf. informes de fs. 5196) y el buen concepto informado (con. informe social obrante a fs. 5200) el hecho de que, pese a que transcurrió el proceso en libertad permaneció a derecho y cumplió con las cargas procesales que le fueron impuestas y el compromiso de la reparación del daño acordada en la presente acta. Asimismo, y tal como postuló el MPF (ver supra I.1), estas mismas circunstancias son ponderadas al momento de considerar que la pena de prisión debe ser dejada en suspenso, ya que demuestran la inconveniencia de aplicar efectivamente la pena privativa de libertad en este caso. Por otra parte, pondero **como agravante** la extensión de la conducta descripta y su reiteración en el tiempo.

Debo apuntar al igual que lo hice respecto de su consorte de causa Eduardo Suris, el representante del MPF postuló la imposición de una pena de ejecución condicional precisando en la audiencia realizada el 27/09/2023 que, en los términos del art. 27 bis del CP, que la condicionalidad de la pena se sujeta a las reglas de conducta a las descriptas en el acápite **I.1.**, supra -a donde se remite a fin de evitar reiteraciones innecesarias-, habiendo sido ratificadas por el imputado y su defensa técnica.

Con ese alcance, considero que las razones invocadas por el Sr. Fiscal lucen razonables y se ajustan a las exigencias de legalidad requeridas por el instituto en cuestión, por lo que convalidaré dicha la modalidad de pena en suspenso de la pena de prisión sujetando Nicolas Ibarra Gutierrez, de acuerdo con lo previsto por el art. 27 bis del Código Penal (art. 27 bis inc. 1, 7 y 8 del CP).

CUARTA CUESTIÓN: Decomiso

Por constituir el decomiso una pena accesoria que alcanza a las cosas que han servido para cometer el hecho y a las ganancias que son el producto o provecho de éste y no surgir de la acusación que el Fiscal lo hubiere propuesto en modo alguno, corresponde estar al límite punitivo antes fijado (art. 23 del CP).

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

QUINTA CUESTIÓN: Reparación de daño

Por último, respecto de lo que concierne a la reparación del daño efectuado con motivo de los hechos delictivos aquí en análisis, cuya monto y procedimiento para su actualización fue expresado en el punto I.2 supra (al que remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias), considero que el mismo resulta adecuado a la luz de la pericia realizada por el cuerpo experto de **peritos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación** obrante a fs. 4606/4623, cuyo objeto de análisis fue determinar el **perjuicio irrogado al Fisco por las empresas creadas por la asociación ilícita: CVP INDUSTRIA S.A, M-MAGNA S.A, ATTIMO BAHIA BLANCA S.A, E&J ARGENTINA S.R.L, SCARSUR BAHIA S.A EN FORMACION, BAHIA ACOPLAR S.A EN FORMACIÓN** (v. fs. 4606/4623).

El *quantum* del perjuicio se ha fijado en base a los ajustes no conformados por los contribuyentes, que a la fecha de la pericia se determinó en la suma de \$ **8.698.086,38**, equivalente -según el método de actualización utilizado por las partes- a la suma \$ **85.625.636,72**. Tal suma ha sido establecida como el valor tope del daño, sin desmedro de que el MPF solicitó a la Administración Federal de Ingresos Públicos que informe el monto total de los ajustes que permanezcan impagos, y que consigne los respectivos intereses y la actualización que corresponda a la fecha, extremo comunicado por AFIP a fs. 5291/5299, donde remarcó que **todas las firmas usuarias** de la facturación apócrifa emitidas por este grupo de usinas **rectificaran sus declaraciones juradas por un importe de 46 millones de pesos**. Indicó asimismo que de dicho monto, a la fecha aún resta cobrar \$ **5.196.250,71**.

Sentado ello, por resultar razonable y adecuada la determinación del *quantum* del perjuicio acordado por las partes, toda vez que se fundamenta en la evaluación técnica de expertos respecto del daño efectuado al Fisco, corresponde atenerse a las convenciones reparatorias consensuadas por el Ministerio Público Fiscal y los imputados, junto con sus respectivas defensas.¹⁵ En consecuencia, corresponde, por un

¹⁵ Los acuerdos incluyen tanto las convenciones de juicio abreviado como los de suspensión de juicio a prueba.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

lado, **condenar a Juan Ignacio Suris, Eduardo Suris, Nicolas Ibarra Gutiérrez en los términos del art. 29** del Código Penal; y asimismo **imponer a Juan Pipkin y Domingo Tomas Goenaga en carácter de reparación del daño en los términos del art. 76 bis** del Código Penal, **al pago solidario** -sin perjuicio del acuerdo privado al que arriben los mismos entre sí a los efectos de su pago- de pesos ochenta y cinco millones seiscientos veinticinco mil seiscientos treinta y seis con setenta y dos centavos (**\$ 85.625.636,72**), de conformidad con art. 31 del Código Penal, en un plazo máximo de noventa (90) días a contar desde que la presente sentencia condenatoria adquiera firmeza. Todo ello, bajo apercibimiento de la ejecución de los bienes y, como asimismo, revocarse el beneficio de suspensión de juicio a prueba acordada a **Juan Pipkin y Domingo Tomas Goenaga (v. infra LIBRO II)**; como así también transformarse en penas de cumplimiento efectivo las asignadas a **Eduardo Suris y Nicolas Ibarra Gutiérrez**, de conformidad con lo acordado por el MPF y los imputados y sus defensas.

Por lo demás, no escapa a mi conocimiento que la Administración Federal de Ingresos Públicos, en el escrito que luce a fs. 5291/5299, indicó un método de actualización de la deuda disímil a aquel utilizado por el representante del Ministerio Publico Fiscal (sin perjuicio de no cuestionar la deuda nominal¹⁶).

Sobre ello, a pesar de las divergencias en los métodos de actualización empleados por el Ministerio Público Fiscal y la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), y más allá de su acierto o error, y sin desconocer las distintas pautas que podrían aplicarse -o hasta incluso no aplicar ninguna-; considero que, a los efectos del proceso penal en curso, el monto propuesto para la reparación del perjuicio ocasionado por los hechos delictivos en análisis, luce suficiente, adecuado y razonable para la homologación de los acuerdos. Esta apreciación tiene su basamento en el dictamen de la pericia autónoma e independiente llevada a cabo por los peritos de la

¹⁶ Se observa una discrepancia en la contabilización de la deuda: por un lado, el MPF contabilizó una deuda original de \$ 41.383.272,33., mientras que, por otro lado, AFIP hace referencia a una deuda de \$ 46 millones.





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Corte Suprema de Justicia de la Nación, cuyos hallazgos proporcionan una base sólida y objetiva para esta valoración, ha sido parte integrante de los acuerdos alcanzados y valorada enfáticamente por el representante de la acusación pública en el marco de la audiencia celebrada el 27 de octubre pasado.

Esta apreciación se sostiene a pesar de la disconformidad manifestada por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), que, vale destacar una vez más, conforme los principios que imperan en el art. 431 bis de nuestro código adjetivo, su dictamen no resulta vinculante para esta judicatura.

A mayor abundamiento destaco que, a todo evento, si hubiera alguna diferencia sustancial que generara un interés legítimo por parte de la Administración Federal de Ingresos Públicos en cuanto al monto del perjuicio aquí determinado, el Fisco conserva incólume su potestad para exigir los remanentes que estime corresponder, quedando expeditas las acciones administrativas y civiles que se desprenden eventualmente de la correlación de la nueva ley penal tributaria y de la ley 11.683, entre otras.

Por esta razón, la disconformidad sostenida por AFIP en cuanto a este extremo arribado por el MPF y los imputados, no conmueven el decisorio y los términos de las convenciones arribadas se encuentran jurídicamente protegidas.

Es importante diferenciar, por un lado, la labor de determinación de deuda y recaudación que recae en el ámbito de competencia de la AFIP, cuya facultad no resulta mermada con la presente resolución, por lo que a todo evento, si lo considerara adecuado, la misma puede proceder conforme a las vías pertinentes. Por otro lado, y lejos de un eventual interés recaudatorio, se encuentra el ámbito de competencia de la justicia penal, que conforme la arquitectura de atribuciones deslindada por nuestra Constitución Nacional, aquí se establece la responsabilidad penal de los imputados y en su caso, se determina la magnitud del daño a ser reparado. Con el presente pronunciamiento se fija la pretensión punitiva, de conformidad con el interés del acusador público, y marca el límite de intervención -únicamente- del poder punitivo del Estado; mas no limita a la AFIP en el ejercicio de sus competencias asignadas,





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

permitiéndole llevar a cabo las tareas que le corresponden dentro de su ámbito de acción; vías ajenas a esta órbita penal.

LIBRO II: DE LA SUSPENSIÓN DEL JUICIO A PRUEBA

1. Tal como se indicó al inicio de la presente, en la audiencia realizada el pasado el día 27 de octubre, el representante del MPF y los imputados Juan Pipkin y Domingo Tomás Goenaga, junto con sus respectivas defensas, indicaron su voluntad de suspender el proceso a prueba, al amparo de las prescripciones del art. 76 bis del CP.

Los términos de estas suspensiones, relativos a las reglas de conducta previstas por el art. 27 bis del Código Penal, y en cuanto a la reparación del daño causado, han sido expuesto en el considerando **I.2**, y valoradores en el acápite titulado **“Quinta cuestión: Reparación de daño”**, a los que me remito a fin de evitar reiteraciones innecesarias.

El Fiscal General, a partir de la calificación legal que entiende aplicable (art. 210, CP), analizó el rol atribuido los imputados, y en particular consideró que si bien de acuerdo a la imputación formaron parte de la asociación ilícita y de la operatoria de la misma, su actuar no resultó equivalente al de los restantes integrantes, tuvo en cuenta la falta de antecedentes penales de los encartados –y en relación a Juan Pipkin, consideró además su corta edad al momento de los hechos (nacido el 19 de julio de 1989) –, motivo por el cual indicó que la condena en concreto que podría aplicarse el instituto bajo análisis pues la pena no superaría los tres años de prisión (v. acta de audiencia de visu a fs. 5193/5200 y además acuerdos presentados por escrito a fs. 5266/5278 y 5279/5290).

Dentro de ese contexto, se llevó a cabo la audiencia "de visu" pero bajo los términos previstos en el artículo 293 y concordantes del código procesal penal con los imputados, estableciendo un contacto personal y directo con ellos, cumpliendo con la





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

inmediación requerida en este caso. En dicha audiencia, también estuvieron presentes sus respectivos defensores, el Ministerio Público Fiscal y la parte querellante.

2. Ya he analizado con anterioridad la oposición ensayada en el marco de la citada audiencia por la representante de la parte querellante, AFIP, y la réplica efectuada en contraposición por el MPF circunstancia que -salvando las diferencias entre ambas instituciones Juicio Abreviado y Suspensión del Proceso a Prueba- encuentra idéntica solución pues deja al titular de la acción al mando de la estrategia de la acusación y con facultades propias y suficientes para adecuar la calificación legal al hecho típico por el cual demanda la solución alternativa al debate oral, tal como se explicó largamente más arriba.

Por lo demás, se observa que la oposición a la suspensión del juicio a prueba únicamente se fundó en la discrepancia de la calificación legal discernida por el Ministerio Público Fiscal; sin embargo, la querella no explicitó los motivos por los cuales tal circunstancia redundaría en un agravio para la misma. La ausencia de fundamentos mínimos, impide a esta judicatura ofrecer una respuesta distinta, lo cual, a su vez, conlleva a que su oposición no sea considerada seria ni pueda ser vinculante para este magistrado (advuértase que no se han invocado ni probado cuestiones de política criminal que afecten o empañen la procedencia del instituto intentado).

Por último en este punto, a modo de obiter dictum, diré que la parte querellante será resarcida del perjuicio sufrido (ver supra “**Quinta cuestión: Reparación de daño**”). Por lo demás, aun en el caso de disconformidad con la reparación ofrecida, tal circunstancia no constituye **en este caso** un óbice para la concesión de la suspensión del juicio a prueba. Ello pues, el art. 76 bis del Código Penal deja reservada la vía de la acción civil para aquélla, en caso de que no aceptara la reparación ofrecida y la suspensión del juicio a prueba fuere igualmente dispuesta por el Tribunal (CFCP, N° FBB 22000088/2005/TO2/2/CFC1 caratulada “PIATTI, Juan José s/ asociación ilícita”, del 10/7/2018)

3. Ahora bien, en lo que refiere a la admisibilidad formal del instituto en análisis, en virtud del delito que se le imputa, la calificación legal discernida por el





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

MPF, el monto de la pena conminado para los hechos ilícitos enrostrados, y la carencia de antecedentes computables en su contra (v. fs. 5194 y 5199), considero que se encuentran reunidas en autos las exigencias tanto objetivas como subjetivas que hacen a la viabilidad del beneficio de la Suspensión de juicio a prueba.

Ello, toda vez que conforme señaló el titular de la acción penal, el delito que se les imputa posee una escala penal de entre 3 y 15 años de prisión y en este caso concreto sería pasible de una condena que, en virtud de la carencia de antecedentes penales se estima podría ser de ejecución condicional.

Por otro lado, considero adecuadas las reglas de conducta fijadas, y tengo particularmente en cuenta que la reparación total del daño causado.

Por los motivos expuestos, **RESUELVO**:

1) DECLARAR ADMISIBLES las solicitudes de juicio abreviado formuladas en la audiencia del día 27/10/23 que lucen, asimismo, en las actas acuerdo agregadas a fs. 5225/5238; 5240/5252 y 5253/5265 de estos actuados (artículo 431 bis, inciso 3° del CPPN).

2) CONDENAR a Juan Ignacio SURIS, cuyas demás condiciones personales son de figuración en autos, por considerarlo coautor por el delito de **asociación ilícita, en su carácter de jefe**, respecto al hecho por el que fuera indagado, a la pena de **CINCO AÑOS DE PRISIÓN**, accesorias legales y costas, conforme a los arts. 5, 12, 29, 40, 41, 45 y 210 del Código Penal y art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación.

UNIFICAR LAS CONDENAS de Juan Ignacio SURIS, e imponer **LA PENA ÚNICA de OCHO AÑOS DE PRISIÓN DE CUMPLIMIENTO EFECTIVO**, comprensiva de la pena impuesta en esta causa y la dictada en el marco de la causa FBB 12000124/2012/TO1, caratulada: “SURIS, JUAN IGNACIO Y





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

OTRO s/INFRACCION LEY 23.737 (ART.5 INC.C), accesorias legales y costas, conforme a los arts. 5, 12, 29, 40, 41, 45 y 210 (primera y segunda oración) del Código Penal y art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación.

TOMAR NOTA de lo aquí resuelto en la causa FBB 12000124/2012/TO1, caratulada: “SURIS, JUAN IGNACIO Y OTRO s/INFRACCION LEY 23.737” adjuntando copia de la sentencia para mayor ilustración.

REPARAR el daño causado contabilizado en la suma de pesos ochenta y cinco millones seiscientos veinticinco mil seiscientos treinta y seis con setenta y dos centavos (\$ 85.625.636,72), conforme lo dispuesto en el acápite “quinta cuestión: reparación del daño”, el cual deberá ser soportado de manera solidaria por todos los imputados de la causa, independientemente del acuerdo al que puedan llegar los mismos entre sí respecto a su pago (arts. 29 y 31 del Código Penal).

3) CONDENAR a Nicolás IBARRA GUTIÉRREZ, cuyas demás condiciones personales son de figuración en autos, por considerarlo coautor por el delito de **asociación ilícita**, en su carácter de miembro, respecto al hecho por el que fuera indagado, a la pena de **TRES AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL**, y costas, conforme los arts. 5, 26, 29, 40, 41, 45 y 210 del Código Penal y art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación.

IMPONER al condenado por el término de **TRES (3) AÑOS**, como **reglas de conducta** del art. 27 bis del CP, bajo apercibimiento de ley, las siguientes obligaciones:

- a. Fijar residencia y someterse al control de un patronato o institución similar, presentándose una vez por mes al mismo e informando cualquier cambio de domicilio que realice en el futuro;
- b. Abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas;
- c. Realizar trabajos no remunerados por el término de tres años, en razón de tres horas semanales, en favor de una institución de bien público o





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

privada de igual tenor; o como alternativa excluyentes entre sí, realizar una donación de \$400.000 (pesos cuatrocientos mil) en sustitución de las tareas antes mencionadas, destinadas a la Fundación CIAN (a ser depositados en la siguiente cuenta bancaria de la entidad: Banco Patagonia; Alias: PADRE.TRIGO.COMETA; CBU: 0340053100530007197002; Cuenta: CC \$ 053-530007197-000; CUIT: 30-71123679-8). Dicho monto, de optar por tal alternativa, deberá ser depositado en su totalidad dentro del quinto día en que la presente adquiera firmeza, o bien en hasta diez cuotas consecutivas e ininterrumpidas iguales, a pagarse dentro del quinto día hábil de cada mes, también a contar desde el momento en que la presente quede firme.

d. **REPARAR el daño causado** contabilizado en la suma de pesos ochenta y cinco millones seiscientos veinticinco mil seiscientos treinta y seis con setenta y dos centavos (\$ 85.625.636,72), conforme lo dispuesto en el acápite “quinta cuestión: reparación del daño”, el cual deberá ser soportado de manera solidaria por todos los imputados de la causa, independientemente del acuerdo al que puedan llegar los mismos entre sí respecto a su pago (arts. 28, 29 y 31 del CP).

HÁGASE SABER a Nicolás IBARRA GUTIÉRREZ que si no cumpliere estas reglas se podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento y si se persistiere o reiterare el incumplimiento, se podrá revocar la condicionalidad de la condena y el condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia (art. 27 bis, CP).

4) CONDENAR a Eduardo SURIS, cuyas demás condiciones personales son de figuración en autos, por considerarlo coautor por el delito de **asociación ilícita**, en su carácter de miembro, respecto al hecho por el que fuera indagado, a la pena de **TRES AÑOS DE PRISIÓN DE EJECUCIÓN CONDICIONAL**, y costas,





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

FBB 12000018/2011/TO1

conforme a los arts. 5, 26, 29, 40, 41, 45 y 210 del Código Penal y art. 530 del Código Procesal Penal de la Nación.

IMPONER al condenado por el término de **TRES (3) AÑOS**, como reglas de conducta del art. 27 bis del CP, bajo apercibimiento de ley, las siguientes obligaciones:

a. Fijar residencia y someterse al control de un patronato o institución similar, presentándose una vez por mes al mismo e informando cualquier cambio de domicilio que realice en el futuro;

b. Abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas;

c. Realizar trabajos no remunerados por el término de tres años, en razón de tres horas semanales, en favor de una institución de bien público o privada de igual tenor; o como alternativa excluyentes entre sí, realizar una donación de \$300.000 (pesos trescientos mil) en sustitución de las tareas antes mencionadas, destinadas a la Asociación de Padres de Autistas (APAdA), cuyos datos resultan los siguientes: domicilio del Centro día y Escuela Avenida Laínez 2515 de Bahía Blanca, teléfono 0291-482-1923, representante legal: Virginia Iparraguirre. Datos de la cuenta bancaria de la institución: CBU 0140413901620001560861, Cuenta 15608/6 sucursal 6200 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, APAdA Bahía Blanca, CUIT 30-70791491-9. Dicho monto, de optar por tal alternativa, deberá ser depositado en su totalidad dentro del quinto día en que la presente adquiera firmeza, o bien en hasta diez cuotas consecutivas e ininterrumpidas iguales, a pagarse dentro del quinto día hábil de cada mes, también a contar desde el momento en que la presente quede firme.

d. **REPARAR el daño causado** contabilizado en la suma de pesos ochenta y cinco millones seiscientos veinticinco mil seiscientos treinta y seis con setenta y dos centavos (\$ **85.625.636,72**), conforme lo dispuesto en el acápite “quinta cuestión: reparación del daño”, el cual deberá ser soportado de manera solidaria por todos los imputados de la causa, independientemente del





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

acuerdo al que puedan llegar los mismos entre sí respecto a su pago (arts. 28, 29 y 31 del CP).

HÁGASE SABER a Eduardo SURIS que si no cumpliere estas reglas se podrá disponer que no se compute como plazo de cumplimiento todo o parte del tiempo transcurrido hasta ese momento y si se persistiere o reiterare el incumplimiento, se podrá revocar la condicionalidad de la condena y el condenado deberá entonces cumplir la totalidad de la pena de prisión impuesta en la sentencia (art. 27 bis, CP).

5) SUSPENDER EL JUICIO A PRUEBA respecto de **Domingo Tomás GOENAGA**, cuyas demás condiciones personales son de figuración en autos, por el plazo de tres años (art. 76 bis Código Penal), siempre que cumpla durante ese periodo, con las siguientes condiciones:

a. Fijar residencia, presentándose, durante el término de la duración de la suspensión, una vez por mes ante el Patronato de Liberados, o autoridad similar correspondiente, informando cualquier cambio de domicilio que realice en el futuro (art. 76 ter primer párrafo e inc. 1º art. 27 bis, ambos del Código Penal);

b. Abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas durante el término de la suspensión (art. 76 ter primer párrafo e inc. 3º art. 27 bis, ambos del Código Penal);

c. Realizar trabajos no remunerados por el término de tres años, en razón de tres horas semanales, en favor de una institución de bien público o privada de igual tenor; Se acuerda la posibilidad de optar por una donación de pesos quinientos mil (\$500.000) en sustitución de las tareas mencionadas, destinadas a la Fundación CIAN (a ser depositados en la siguiente cuenta bancaria de la entidad: Banco Patagonia; Alias: PADRE.TRIGO.COMETA; CBU: 0340053100530007197002; Cuenta: CC \$ 053-530007197-000; CUIT: 30-71123679-8). De optar esta última alternativa, el monto deberá ser





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

depositado en su totalidad dentro del quinto día en que la concesión de la suspensión de juicio a prueba quede firme, o bien hasta diez cuotas consecutivas e ininterrumpidas iguales, a pagarse dentro del quinto día hábil de cada mes a contar desde el momento en que la presente adquiera firmeza (art. 76 ter primer párrafo e inc. 8° art. 27 bis, ambos del Código Penal);

d. **REPARAR el daño causado** contabilizado en la suma de pesos ochenta y cinco millones seiscientos veinticinco mil seiscientos treinta y seis con setenta y dos centavos (\$ **85.625.636,72**), conforme lo dispuesto en el acápite “quinta cuestión: reparación del daño”, el cual deberá ser soportado de manera solidaria por todos los imputados de la causa, independientemente del acuerdo al que puedan llegar los mismos entre sí respecto a su pago (arts. 31 y 76 bis, tercer párrafo, del Código Penal).

6) SUSPENDER EL JUICIO A PRUEBA respecto de **Juan PIPKIN**, cuyas demás condiciones personales son de figuración en autos, por el plazo de tres años (art. 76 bis Código Penal), siempre que cumpla durante ese periodo, con las siguientes condiciones:

a. Fijar residencia, presentándose, durante el término de la duración de la suspensión, una vez por mes ante el Consulado Argentino de la ciudad de su residencia, o autoridad similar correspondiente, informando cualquier cambio de domicilio que realice en el futuro (art. 76 ter primer párrafo e inc. 1° art. 27 bis, ambos del Código Penal);

b. Abstenerse de usar estupefacientes o abusar de bebidas alcohólicas durante el término de la suspensión (art. 76 ter primer párrafo e inc. 3° art. 27 bis, ambos del Código Penal);

c. Realizar trabajos no remunerados por el término de tres años, en razón de tres horas semanales, en favor de una institución de bien público o privada de igual tenor. Se acuerda la posibilidad de optar por una donación de \$400.000 (pesos cuatrocientos mil) en sustitución de las tareas mencionadas,





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

destinadas a la institución INCUDI (Instituto de Custodia y Adaptación para Disminuidos Psicofísicos), cuyos datos resultan los siguientes: Domicilio Mitre 709, Bahía Blanca; CUIT: 30-55161976-8, Apoderado: Ernesto Horacio IPARRAGUIRRE, Datos de la cuenta bancaria de la institución: Número de Cuenta: 6207-15313/1; CBU: 0140460301620701531318 del Banco de la Provincia de Buenos Aires, Dicho monto, de optar por tal alternativa, deberá ser depositado en su totalidad dentro del quinto día en que la concesión de la suspensión de juicio a prueba quede firme, o bien en hasta diez cuotas consecutivas e ininterrumpidas iguales, a pagarse dentro del quinto día hábil de cada mes a contar desde el momento en que la presente adquiera firmeza (art. 76 ter primer párrafo e inc. 8° art. 27 bis, ambos del Código Penal);

d. **REPARAR el daño causado** contabilizado en la suma de pesos ochenta y cinco millones seiscientos veinticinco mil seiscientos treinta y seis con setenta y dos centavos (\$ 85.625.636,72), conforme lo dispuesto en el acápite “quinta cuestión: reparación del daño”, el cual deberá ser soportado de manera solidaria por todos los imputados de la causa, independientemente del acuerdo al que puedan llegar los mismos entre sí respecto a su pago (arts. 31 y 76 bis, tercer párrafo, del Código Penal).

7) ENCOMENDAR a la Actuaría que oportunamente proceda a efectuar el cómputo de pena pertinente respecto de los encartados (art. 493 CPPN).

8) IMPONER LAS COSTAS del proceso a los condenados (arts. 29 inc. 3° del C.P. y 530, 531 y ccdtes. del C.P.P.N.).

9) FIRME que sea la presente, **PROCEDER A LA DEVOLUCIÓN** de los expedientes administrativos a la Administración Federal de Ingresos Públicos; y la documentación secuestrada a las partes que correspondan.

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883



Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

10) REGULAR los honorarios de la **Dra. Jana Pipkin** y del **Dr. Facundo Andrés Álvarez** (codefensores particulares de Juan Pipkin) por su actuación, respecto de la primera, desde la indagatoria y hasta el dictado de la presente, y respecto del segundo por su intervención durante la instancia de juicio hasta el dictado de la presente y sustanciación de la audiencia de suspensión de juicio a prueba en la suma total de **NOVENTA (90) UMAS** correspondiendo **(50) UMAS** a la **Dra. Jana Pipkin**, y **(40) UMAS** al **Dr. Facundo Andrés Álvarez**, equivalentes al día de la fecha conforme la Acordada 30/23 y res. SGA 2722/2023 de la CSJN a **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.268.650)** respecto la primera y a **UN MILLÓN CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$1.014.920)** respecto el segundo sin inclusión de la alícuota correspondiente al impuesto al valor agregado (arts. 16, 19, 33 y 51 y cctes. ley 27.423, Ac. CSJN 30/23 y res. SGA 2722/2023 de la CSJN).

11) REGULAR los honorarios del **Dr. Leonardo Gomez Talamoni** por su actuación como defensor particular de **Nicolás Ibarra Gutierrez** desde la indagatoria y hasta el dictado de la presente sentencia en el marco del juicio abreviado en la suma de **CINCUENTA (50) UMAS** equivalentes al día de la fecha conforme Acordada 30/23 y res. SGA 2722/2023 de la CSJN a **UN MILLÓN DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$1.268.650)** sin inclusión de la alícuota correspondiente al impuesto al valor agregado (arts. 16, 19, 33 y 51 y cctes. ley 27.423, Ac. CSJN 30/23 y res. SGA 2722/2023 de la CSJN).

12) REGULAR los honorarios de los **Dres. Mariano Ramón Bernárdez y Adrián Martín Rois** (codefensores particulares de Juan Ignacio Suris) por su actuación, respecto del primero, durante la instancia de juicio y hasta el dictado de la presente sentencia en el marco del juicio abreviado y las solicitudes incidentales y, en relación al segundo, por su intervención durante la instancia de juicio y hasta el dictado de la presente sentencia en el marco del juicio abreviado en la suma total de





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1

Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

OCHENTA Y CINCO (85) UMAS correspondiendo **45 UMAS** al Dr. Bernárdez y **40 UMAS** al Dr. Rois equivalentes al día de la fecha conforme la Acordada 30/23 y res. SGA 2722/2023 de la CSJN a **UN MILLÓN CIENTO CUARENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS (\$1.141.785)** para el primero y **UN MILLÓN CATORCE MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS (\$1.014.920)** para el segundo por la labor desarrollada en autos sin inclusión de la alícuota correspondiente al impuesto al valor agregado (arts. 14, 19, 33 y 51 y cctes. ley 27.423, Ac. CSJN 30/2023 y res. SGA 2722/2023 de la CSJN).

13) DISPONER que se notifique a las partes haciéndose entrega de copia del sistema de Gestión Judicial Lex100 de la presente, en virtud del trámite de juicio abreviado impartido a esta causa.

14) COMUNICAR lo aquí resuelto al Juzgado Federal n°1 a sus efectos.

Regístrese, notifíquese, comuníquese, publíquese (Acordadas 15/2013 y 24/2013 de la CSJN) y consentida o ejecutoriada que sea, oportunamente, fórmese legajo de ejecución y archívense.

ERNESTO SEBASTIÁN

PRESIDENTE

ANTE Mí:

Paula Pojomovsky

Secretaria de Cámara





Poder Judicial de la Nación
Tribunal Oral Federal de Bahía Blanca

FBB 12000018/2011/TO1
Principal en Tribunal Oral TO01 - IMPUTADO: SURIS, JUAN IGNACIO Y OTROS s/ASOCIACION ILICITA FISCAL
DENUNCIANTE: AFIP - DGI Y OTRO

Fecha de firma: 23/11/2023

Firmado por: ERNESTO PEDRO F SEBASTIAN, PRESIDENTE

Firmado por: PAULA MARINA POJOMOVSKY, SECRETARIA DE CAMARA



#27859993#392723842#20231123115053883